



Análisis de Brechas del Sistema de Gestión Ambiental y Social

**Programa de Integración Socio Urbana y de
Mejoramiento de Vivienda
(AR-L1361)**

**Versión Preliminar
Diciembre 2022**

Tabla de Contenidos

1	Introducción.....	5		
1.1	Propósito y Alcance.....	5		
1.2	Justificación.....	5		
2	Descripción del Programa	7		
2.1	Objetivos	7		
2.2	Componentes.....	7		
2.3	Costo y Financiamiento.....	9		
2.4	Beneficiarios.....	9		
2.5	Arreglos Institucionales.....	9		
3	Marco Normativo	10		
3.1.	Marco Institucional	10		
3.2.	Marco Normativo Nacional....	11		
			3.3.	Marco de Política Ambiental y Social del BID (MPAS)27
			4	Análisis de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales.....
				36
			4.1	Pre-Identificación de Impactos 36
			4.2	Identificación de Impactos.....41
			5.4	Riesgos de Desastres49
			5	Análisis de Brechas
				50
			6	Indicadores de Gestión Ambiental y Social
				91
			7	Conclusiones
				92

Lista de Tablas

Tabla 1 - Normativa referida a licenciamiento ambiental	12
Tabla 2 - Normativa referida a Desarrollo urbano y mejoramiento de vivienda.....	13
Tabla 3 - Normativa referida a Agua y Saneamiento	14
Tabla 4 - Normativa referida a Gestión de Residuos Sólidos Urbanos	15
Tabla 5 - Normativa referida a Gestión de Residuos Peligrosos	15
Tabla 6 - Normativa referida a Gestión de Emisiones Gaseosas	17
Tabla 7 - Normativa referida a Ruidos	18
Tabla 8 - Normativa referida a Energía	18
Tabla 9 - Normativa referida a Suelos.....	19
Tabla 10 - Normativa referida a Áreas Protegidas.....	19
Tabla 11 - Normativa referida a Flora, Fauna y Bosque Nativo	19
Tabla 12 - Normativa referida a Tránsito Vehicular y Seguridad Vial	20
Tabla 13 - Normativa referida a Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional	21
Tabla 14 - Normativa referida a Aspectos Sociales.....	22
Tabla 15 - Normativa referida a personas con discapacidad	23
Tabla 16 - Normativa referida a población migrante.....	24
Tabla 17 - Normativa relacionada a Pueblos Indígenas y sus Comunidades	24
Tabla 18 - Normativa referida a Patrimonio Cultural y Arqueológico	26
Tabla 19 - Normativa referida a acceso a la información ambiental.....	26
Tabla 20 - Normativa referida a Reasentamiento Involuntario	27
Tabla 21 - Normas de Desempeño BID aplicables al Programa.....	31
Tabla 22 – Pre-Identificación de posibles Impactos Ambientales y Sociales negativos (Programa AR-L1361)	36
Tabla 23 – Identificación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales del Programa AR-L1361.....	42
Tabla 24 – Análisis de Brechas del Programa AR-L1361	51
Tabla 25 – Indicadores de Gestión Ambiental y Social del Programa AR-L1361	91
Tabla 26 – Resumen de Brechas identificadas de Programa AR-L1361.....	93

Lista de Figuras

Figura 1 – Teoría del Cambio. Fuente BID.....	6
---	---

Lista de Siglas y Abreviaturas

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BP	Barrios Populares (BP)
CCLIP	Crédito Condicional para Proyectos de Inversión
EIAS	Estudio de Impacto Ambiental y Social
ETAS	Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales
HV	Hogares Vulnerables
IFC	Corporación Financiera Internacional
IASS	Informe Ambiental y Social de Seguimiento
LBR	Préstamo Basado en Resultados (LBR, por sus siglas en inglés)
MARRC	Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos
MICI	Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID
OE	Organismo Ejecutor
OPC	Comité de Políticas Operativas del BID (OPC, por sus siglas en inglés)
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PGL	Procedimiento de Gestión Laboral
PISU	Programa de Integración Socio Urbana
PPPI	Plan de Participación de Partes Interesadas
PRI	Plan de Reasentamiento Involuntario
RENABAP	Registro Nacional de Barrio Populares
RO o ROP	Reglamento Operativo del Programa
RSU	Residuos Sólidos Urbanos
SGAS	Sistema de Gestión Ambiental y Social
SISU	Secretaría de Integración Socio Urbana
SH	Soluciones Habitacionales
USD	Dólares estadounidenses

1 Introducción

1.1 Propósito y Alcance

En el marco de la preparación del **Programa de Integración Socio Urbana y de Mejoramiento de Vivienda** (AR-L1361), en adelante el Programa, se elabora el presente **Análisis de Brechas**.

El objetivo de este Análisis es realizar una comparativa de las brechas del Sistema de Gestión Ambiental y Social del Organismo Ejecutor del Programa, incluyendo la legislación ambiental y social, frente al Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID, en relación con esta operación y para los aspectos socioambientales considerados en cada una de las Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS) del MPAS del BID.

El Programa se estructurará como un Préstamo Basado en Resultados (LBR, por sus siglas en inglés). Un préstamo basado en resultados contribuye a la consecución de los resultados de un programa gubernamental existente o nuevo. Se trata de un préstamo de inversión que financia los costos de las actividades (por ejemplo, bienes, obras y servicios) relacionadas con el logro de esos resultados y se desembolsa una vez que estos se han alcanzado y verificado adecuadamente (MPAS, 2020).

El Organismo Ejecutor (OE) del Programa será el Gobierno de la República Argentina a través del **Ministerio de Desarrollo Social** de la Nación, quien articulará con subejecutores que podrán ser Provincias o Municipios.

1.2 Justificación

Argentina enfrenta una progresiva precarización del stock habitacional. El déficit de vivienda se ha incrementado de 2,8 millones (2010) a 3,6 millones¹ de hogares (2020), de los cuales 1,4 millones tienen déficit cuantitativo (15,1%) y 2,2 millones déficit cualitativo (23,7%). Además, la cantidad de soluciones habitacionales (SH) generadas por el mercado formal es inferior a la demanda originada por la formación de nuevos hogares.

Estos fenómenos han generado presión sobre el parque habitacional, llevando a que gran parte de los hogares resuelvan sus necesidades de vivienda sin suficientes condiciones de habitabilidad (1,4 millones), carentes de servicios (746.000), en situación de cohabitación (259.000) y hacinamiento (79.000)². La ausencia de SH accesibles en la ciudad formal genera más hogares en Barrios Populares (BP).

En 2016, se realizó un relevamiento nacional que permitió la elaboración del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Éste fue actualizado y registra un total de 5.687 BP con 1.168.731 hogares.

El déficit habitacional se encuentra sobrerrepresentado en los quintiles I y II, siendo de 52,1% y 45,7% respectivamente, configurando un universo de 1.823.500 Hogares Vulnerables (HV). Los HV poseen vulnerabilidades interconectadas, tales como la vulnerabilidad social, al verse expuestos a cambios abruptos en su nivel de vida por variaciones en sus condiciones laborales o de ingresos; o de vulnerabilidad habitacional, ya que se ven obligados a residir en viviendas deficitarias. Esto se agrava

¹ EPH 2020-INDEC.

² EPH 2020-INDEC.

en términos de género y diversidad, por su condición de migrantes, edad y cambio climático, factores que potencian a las vulnerabilidades descriptas.

Para dar respuesta a la problemática habitacional, y a partir de la información relevada en el marco del RENABAP, en 2016 el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) creó el Programa de Integración Socio Urbana (PISU) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Dada la magnitud de la problemática, se identifica espacio de mejora en estos programas del Estado y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del MDS para generar un mayor impacto en un menor período de tiempo.

Existe una progresiva precarización de las condiciones habitacionales de los HV, lo que incrementa las barreras de inclusión socio urbana. Para este problema se han identificado cuatro causas principales:

- Causa 1: Existen limitaciones técnico-administrativas en los tres niveles de gobierno que afectan la gestión territorial y su capacidad para garantizar un hábitat adecuado.
- Causa 2: Existe una precarización del stock habitacional de HV y una oferta limitada de Soluciones Habitacionales (SH) adecuadas para los HV residentes en las áreas formales adyacentes a los BP.
- Causa 3: La seguridad en la tenencia de la tierra y el acceso a servicios básicos y urbanos en BP son deficitarios.
- Causa 4: Las condiciones socioeconómicas de los BP restringen las oportunidades de integración social de sus habitantes.

Este Programa se enfoca en la búsqueda de soluciones innovadoras que atenúen la problemática de la precarización del hábitat en Argentina y para ello se propone la siguiente Teoría de Cambio.

Problema de desarrollo			
Existe una progresiva precarización de las condiciones habitacionales de los Hogares Vulnerables (HV), lo que aumenta sus barreras de integración socio urbana			
Causa 01. Existen limitaciones técnico-administrativas en los tres niveles de gobierno que afectan la gestión territorial y su capacidad para garantizar un hábitat adecuado	Causa 02. Existe una precarización del stock habitacional de HV y una oferta limitada de Soluciones Habitacionales (SH) adecuadas para los HV residentes en las áreas formales adyacentes a Barrios Populares (BP) y propensos a migrar a los mismos	Causa 03. La seguridad en la tenencia de la tierra y el acceso a servicios básicos y urbanos en BP son deficitarios	Causa 04. Las condiciones socioeconómicas de los BP restringen las oportunidades de integración social de sus habitantes
Objetivo general de desarrollo			
Contribuir a la integración socio urbana y a la mejora de las condiciones habitacionales de los HV			
Objetivos específicos			
Objetivo específico 01. Fortalecer las capacidades de gestión del Organismo Ejecutor (OE) y de los Organismos Sub-ejecutores (OSEs)	Objetivo específico 02. Mejorar las condiciones habitacionales de los HV en BP y sus áreas formales adyacentes	Objetivo específico 03. Mejorar el hábitat y aumentar la seguridad de la tenencia de los residentes en BP	Objetivo específico 04. Promover el desarrollo socioeconómico y comunitario en BP
Componentes			
Componente 01. Modernización y fortalecimiento institucional	Componente 02. Mejora de las condiciones habitacionales de los hogares vulnerables	Componente 03. Integración socio urbana de barrios populares	Componente 04. Desarrollo socioeconómico y comunitario en BP con perspectiva de género y diversidades
Resultados esperados			
1. Eficientización de la gestión de los programas vinculados a la integración socio urbana	1. Mejora de la calidad de las viviendas de los HV	1. Aumento de la cobertura de servicios básicos en BP	1. Mejora en el acceso a programas sociales
2. Mejora de la sistematización, transparencia y accesibilidad de datos del RENABAP	2. Disminución de tasa de hacinamiento	2. Aumento de seguridad en la tenencia en BP	2. Fortalecimiento de las capacidades productivas de la población económicamente activa de BP
	3. Aumento de la oferta de SH en áreas degradadas adyacentes formales	3. Aumento del acceso a la infraestructura urbana en BP	3. Fortalecimiento de las capacidades de las OSC y las unidades económicas que aportan al desarrollo socio comunitario y productivo en BP

Figura 1 – Teoría del Cambio. Fuente BID

2 Descripción del Programa

2.1 Objetivos

El objetivo general del Programa es contribuir a la integración socio urbana y la mejora de las condiciones habitacionales de los hogares vulnerables.

Los objetivos específicos son:

- (i) Fortalecer las capacidades de gestión del Organismo Ejecutor (OE) y de los Organismos Sub-Ejecutores;
- (ii) Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares vulnerables en barrios populares y sus áreas formales adyacentes;
- (iii) Mejorar el hábitat y aumentar la seguridad de la tenencia de la tierra de los residentes en BP; y
- (iv) Promover el desarrollo socioeconómico y comunitario en barrios populares. La operación fue estructurada en los siguientes componentes.

2.2 Componentes

El Programa está estructurado en los siguientes cuatro componentes:

2.2.1 Componente 1. Modernización y fortalecimiento institucional en los tres niveles de gobierno (BID: USD 6.000.000).

Se alcanzarán los resultados a través de: (i) asistencia técnica para fortalecer las unidades en los procesos técnicos y fiduciarios; (ii) capacitaciones de fortalecimiento para las unidades; (iii) contratación de equipos de soporte y adquisición de equipamiento; (iv) estudios para el diseño de estrategias de intervención y herramientas de monitoreo para la prevención de conformación de nuevos asentamientos y/o crecimiento de los existentes; (v) adquisición, desarrollo, mejoramiento, instalación y operación de herramientas y soportes tecnológicos y/o informáticos relacionados con la gestión del programa; (vi) desarrollo de sistemas de procesamiento y gestión de la información climática en articulación con los sistemas existentes; (vii) la actualización del RENABAP mediante nuevas tecnologías; y (viii) estrategias para intervenir BP de forma temprana incorporando criterios de riesgo climático y social.

2.2.2 Componente II. Mejora de las condiciones habitacionales de los hogares vulnerables (BID: USD 58.500.000)

Subcomponente II.1. Aumento de la oferta de soluciones habitacionales y mejora de las condiciones habitacionales existentes de hogares vulnerables en áreas formales adyacentes a barrios populares.

Subcomponente II.2. Aumento de la oferta de soluciones habitacionales y mejora de las condiciones habitacionales existentes de hogares vulnerables en barrios populares.

Para ambos subcomponentes se buscará alcanzar los resultados a través de: (i) obras de mejoramiento de vivienda considerando criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica; (ii) asistencia técnica y social; (iii) la formulación de proyectos ejecutivos incluyendo cambio climático y sostenibilidad

ambiental; (iv) obras para la generación de soluciones habitacionales con enfoque de género y diversidades y que incluyan criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica; y (v) servicios para la incorporación de criterios de diseño para viviendas de uso mixto, incluyendo criterios de vivienda verde y resiliente. Además, se prevé la financiación de conexiones a los servicios públicos para el Subcomponente II.2.

2.2.3 Componente III. Integración socio urbana de BP (BID: USD 72.000.000)

Subcomponente III.1. Intervenciones urbanas integradoras, provisión y mejora de infraestructura urbana y equipamiento socio comunitario. Se alcanzarán los resultados a través de: (i) diagnóstico de línea base; (ii) formulación de proyectos ejecutivos y sus estudios preliminares; (iii) construcción de redes de agua potable, cloacas, drenaje pluvial, distribución de gas, electricidad, alumbrado público y servicios de telecomunicaciones; (iv) construcción de conexiones intradomiciliarias; (v) construcción de sistemas de movilidad; (vi) construcción de espacios públicos seguros y áreas verdes fomentando la incorporación de tecnologías digitales y mapeo en su diseño; (vii) equipamiento urbano inteligente, equipamiento comunitario que incorpore criterios de edificios verdes y las obras complementarias y de mitigación y adaptación al cambio climático requeridas; (viii) construcción y provisión de bienes y servicios para el tratamiento y gestión de los residuos sólidos urbanos; (ix) obras estratégicas que permitan la integración del BP con la ciudad formal; y (x) obras tempranas de rápida ejecución para la puesta en marcha de proyectos.

Subcomponente III.2. Ordenamiento territorial y seguridad de la tenencia. Se alcanzarán los resultados a través de: (i) estudios técnicos y legales; (ii) propuestas normativas para la modificación de códigos urbanos; (iii) gastos relacionados con la participación de las comunidades con especial foco en género; (iv) planos de mensura; (v) amojonamientos; (vi) incorporación catastral de nuevas parcelas; (vii) regularización legal de lotes para realizar la transferencia de la titularidad del dominio; (viii) gastos relacionados a la subdivisión de lotes y viviendas; y (ix) gastos relacionados a la regularización de servicios públicos. En este componente se hará un esfuerzo por incorporar nuevas tecnologías tales como *blockchain*.

2.2.4 Componente IV. Desarrollo socioeconómico y comunitario en BP con perspectiva de género y diversidad (BID: US\$8.250.000)

Subcomponente IV.1. Desarrollo socioeconómico de HV en BP. Se alcanzarán los resultados a través de: (i) estudios de diagnóstico social y de brechas de servicios sociales existentes; (ii) acciones para ampliar la cobertura y la participación en los programas sociales; (iii) la realización de diagnósticos sociales y ambientales; (iv) el diseño e implementación de planes de desarrollo económico; y (v) el diseño e implementación de acciones vinculadas a salud, hábitat, educación, género y diversidad, ambiente, entre otras.

Subcomponente IV.2. Fortalecimiento de OSC, unidades económicas y entidades públicas que aporten al desarrollo socio comunitario y productivo de los BP. Se alcanzarán los resultados a través de: (i) el diseño e implementación de planes de desarrollo económico incentivando la economía circular; (ii) puesta en valor y ampliación de espacios comunitarios; (iii) tutorías, formación, capacitación e implementación para la conformación de dispositivos que atiendan problemáticas emergentes en el territorio; (iv) provisión de bienes y servicios para el desarrollo socio comunitario y productivo; (v) asistencia técnica y/o financiera para unidades productivas nuevas y fortalecimiento de las existentes; (vi) mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica del barrio y/o

vinculada al desarrollo económico local y regional; y (vii) provisión de bienes y servicios relacionados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

2.2.5 Administración, supervisión, evaluaciones y auditoría (BID: USD 5.250.000).

Incluye gastos de funcionamiento, equipamiento y gestión del OE, servicios de consultoría de firmas o individuos para llevar a cabo evaluaciones, auditorías, actividades de administración y supervisión del programa

2.3 Costo y Financiamiento

El Programa contará con un monto propuesto total de USD 150.000.000 provenientes del Capital Ordinario del Banco, con plazo de desembolso de 5 años.

Se presenta como una operación individual estructurada como un Préstamo Basado en Resultados (LBR, por sus siglas en inglés, dado a que cumple con los requisitos encontrado bajo el (GN-2869-1) y sus Directrices (GN-2869-3) ya que: (i) respaldará a un programa existente del gobierno en la entrega de resultados mediante el financiamiento de su marco de gastos; (ii) mejorará los programas de hábitat e integración urbana al concentrar esfuerzos en el acompañamiento técnico del Banco para orientar la gestión a resultados vinculados al monitoreo, focalización, acompañamiento y evaluación enfocado en la consecución de resultados; y (iii) promoverá el uso de los sistemas fiduciarios del organismo ejecutor, que en el caso de Argentina, fueron oportunamente validados para su uso.

2.4 Beneficiarios

Los beneficiarios del Programa serán los hogares vulnerables residentes en barrios populares, y en sus áreas formales adyacentes con déficit habitacional. A su vez, se priorizarán los hogares localizados en zonas con vulnerabilidad climática mitigable y liderados por mujeres, personas LGBTQ+, adultos mayores, migrantes y/o a cargo de personas con diversidad funcional.

2.5 Arreglos Institucionales

La operación está planteada como *double-booking* entre las Divisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y Cambio Climático y Sostenibilidad (CCS).

El Organismo Ejecutor será el Ministerio de Desarrollo Social, quien articulará con subejecutores que podrán ser Provincias o Municipios.

3 Marco Normativo

Este capítulo describe el marco legal y sectorial aplicable al Programa, considerando las áreas ambientales, sociales, de seguridad y salud ocupacional, correspondiente a intervenciones de integración socio urbana y de mejoramiento de vivienda.

Este marco servirá de referencia para la elaboración de los documentos ambientales y sociales específicos que, a su vez, deberán incorporar la normativa local (provincial y municipal) vigente para cada caso de acuerdo con la naturaleza y área de intervención específica (localización geográfica), según corresponda.

3.1. Marco Institucional

La República Argentina presenta una organización política federal, constituida por 23 Provincias y una Ciudad Autónoma. El esquema normativo está conformado por la Constitución Nacional como base normativa sancionada en 1853 y reformada en los años 1860, 1898, 1957 y 1994, leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental que establecen la base de las políticas públicas en materia ambiental, las cuales son de cumplimiento obligatorio para las provincias, quienes pueden dictar normas complementarias más estrictas, siempre que respeten los principios de la norma nacional.

El principal organismo a nivel nacional que tendrá intervención durante la preparación e implementación del Programa es el **Ministerio de Desarrollo Social** de la Nación.

De acuerdo a la Ley Nacional de Ministerios, Ley N° 22.520, Art. 23 bis, compete al **Ministerio de Desarrollo Social** asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política social orientada a la asistencia, promoción, cuidados e inclusión social y el desarrollo humano, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores, la protección de las familias y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, así como en lo relativo al acceso a la vivienda y el hábitat dignos y a la integración socio urbana, y al cumplimiento de los compromisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales, en materia de su competencia.

Actualmente, se encuentra en ejecución el **Programa de Integración Socio Urbana (PISU)** bajo la coordinación general de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). En su carácter de Ejecutor, es la responsable técnica de la ejecución general del Programa, y a través de la intervención de la Secretaría de Coordinación, de la administración de los recursos del Préstamo, debiendo ejercer una adecuada coordinación interinstitucional y tomar las previsiones necesarias para que el PISU se ejecute en el marco del cumplimiento con las Políticas y condiciones socio ambientales contractuales de la Operación.

La SISU tiene a su cargo la coordinación técnica y operativa de todos los componentes del Programa, incluyendo las acciones de gestión ambiental y social, la verificación de que estos cumplan en su formulación con los requerimientos socioambientales establecidos en el Reglamento Operativo y Contrato de Préstamo, y la supervisión ambiental y social de la ejecución de los proyectos.

Los Subejecutores del Programa son responsables de los aspectos ambientales y sociales vinculados con la preparación, formulación, ejecución y seguimiento de los Proyectos, y tienen responsabilidad operativa para: la contratación de los equipos técnicos multidisciplinarios; la formulación y aprobación de los proyectos (incluidos los aspectos de gestión socioambiental para cumplimiento con las Políticas del Banco), que serán luego sometidos a la aprobación de la SISU con la no objeción del BID; la contratación, seguimiento e inspección de las obras y otras actividades del proyecto; la aprobación de informes de avance donde se incluyen los temas de gestión ambiental y social en obras y la aprobación de certificados de obra (que deberán ser presentados a la SISU para su aprobación); y la gestión de los pagos a consultores, proveedores y contratistas.

3.1.1 Sistema de Gestión Ambiental y Social del Ejecutor

Como parte de los instrumentos de gestión ambiental y social desarrollados en el marco del PISU se encuentra el Marco de Gestión Ambiental y Social.

Este documento reúne, entre otros, los siguientes instrumentos:

- Ficha Ambiental y Social
- Lineamientos del Plan de Gestión Ambiental y Social
- Marco de Reasentamiento
- Planilla del Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos
- Informes de Cumplimiento Ambientales y Sociales.

Estos instrumentos forman parte del Sistema de Gestión Ambiental y Social del ejecutor, y fueron estudiados en este Análisis de Brechas.

3.2. Marco Normativo Nacional

A continuación, se presenta un resumen del marco jurídico ambiental y social aplicable al Programa a nivel nacional, que podrá ser considerado como referencia para la elaboración y ejecución de los proyectos que se financien en el marco del Programa.

Dada la cantidad de normativa ambiental existente en los distintos niveles jurisdiccionales, a fin de facilitar la comprensión y referencia posterior, se desarrollaron tablas agrupadas por temática con las principales leyes, decretos y resoluciones.

El listado no es exhaustivo y debe ser considerado descriptivo y orientativo. Durante la elaboración y diseño de los proyectos específicos se deberá relevar, validar, actualizar y/o ajustar el presente listado según la legislación ambiental y social pertinente, y la estructura institucional (nacional y provincial) aplicable al proyecto, según corresponda.

3.1.2 Licenciamiento Ambiental

Se deberá considerar, para cada proyecto específico, lo establecido por la legislación ambiental provincial o municipal en relación con el requerimiento de la realización de un Estudio de Impacto Ambiental, audiencia pública, y/o la tramitación de habilitaciones y permisos ambientales específicos.

Tabla 1 - Normativa referida a licenciamiento ambiental

Convenios Internacionales	
Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR/03	Establece que los Estados Partes deberán orientarse a la promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento más eficaz de los recursos disponibles, la incorporación del componente ambiental en las políticas sectoriales, la promoción del desarrollo sustentable, tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas ambientales, promoción de una efectiva participación de la sociedad civil y fomento a la internalización de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos económicos y regulatorios de gestión.
Acuerdo de Escazú	Es un Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.
Legislación Nacional	
Constitución Nacional	<p>Art N.º 41: establece que todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Introduce el concepto de desarrollo sustentable e introduce disposiciones aplicables a quienes ocasionen un daño al ambiente, señalando la recomposición del daño ambiental perpetrado.</p> <p>Art N.º 42: Derecho a la protección de su salud, seguridad, intereses y educación.</p> <p>Art N.º 121: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”.</p> <p>Artículo 124: Las provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales que se encuentren en su territorio, siendo los ríos un recurso natural enmarcado en este régimen.</p>
Ley N.º 25.841	Aprueba el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR.

Ley N.º 25.675 Ley General del Ambiente.	Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Fija como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental la Evaluación de Impacto Ambiental. (Arts. 8, 11, 12, 13, 21, Anexo I).
Decreto reglamentario N.º 481/03	Designa a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación de la Ley 25.675/02.
Ley N.º 27.566	Aprueba el Acuerdo de Escazú.
Resolución N.º 102/19	Actualiza el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental que funciona en la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Resolución N.º 434/19	Establece el procedimiento para la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a políticas, planes y programas que se desarrollen en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

3.1.3 Desarrollo Urbano y Mejoramiento de Vivienda

Tabla 2 - Normativa referida a Desarrollo urbano y mejoramiento de vivienda

Legislación Nacional	
Ley 24.374/94	Establece un régimen de regularización dominial en favor de ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante 3 años, con anterioridad al 1/1/92, y su causa lícita, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente.
Ley N.º 24.464/95	Crea el Sistema Federal de la Vivienda con el objeto de facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna. Ello, conforme lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Ley N.º 27.078/14	Programa de Internet en Barrios Populares del ENACOM. El Estado nacional garantiza el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica. El Servicio Universal es un concepto dinámico cuya finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los Servicios de TIC prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable.
Ley N.º 27.453/18	Declárase de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Se entiende por integración socio urbana, a los efectos de la presente ley, al conjunto de acciones orientadas a la mejora y

	ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
Decreto N.º 358/17	Créase el REGISTRO NACIONAL DE BARRIOS POPULARES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN URBANA (RENABAP) en el ámbito de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016.
Decreto N.º 789/19	Transfiere el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la órbita del entonces Ministerio de Salud y Desarrollo Social, actual Ministerio de Desarrollo Social.

3.1.4 Agua y Saneamiento

Tabla 3 - Normativa referida a Agua y Saneamiento

Legislación Nacional	
Ley N.º 25.688/02	Ley de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos. Establece presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, utilización de las aguas, comités de cuencas hídricas, entre otros.
Ley N.º 26.221/07	Establece prestación del servicio de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales. Control de la contaminación hídrica. Marco regulatorio.
Decreto N.º 776/92	Asigna a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano el poder de control de la contaminación de las aguas y preservación de los recursos hídricos y crea la Dirección de Contaminación Hídrica. Modifica Decreto 674/89.
Resolución SRNyAH N.º 315/94	Establece estándar de calidad para los vertidos líquidos directos a cuerpo de agua.

3.1.5 Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Tabla 4 - Normativa referida a Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Legislación Nacional	
Ley N.º 25.916/04 Residuos Domiciliarios	Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas. Respecto a la recolección y transporte, define que las autoridades competentes deberán garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
Decreto N.º 779/22	Aprueba la Reglamentación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios N.º 25.916 y establece el “Código unificado de colores para la clasificación e identificación de fracciones de residuos domiciliarios”.

3.1.6 Gestión de Residuos Industriales, Peligrosos y Especiales

Tabla 5 - Normativa referida a Gestión de Residuos Peligrosos

Convenios Internacionales	
Convención de Basilea	Obliga a las partes a asegurar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional, aplicando controles estrictos desde el momento de la generación de un desecho peligroso hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, reciclado, recuperación y eliminación final.
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes	El objetivo del Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. Se establece en el anexo A el listado de productos químicos a prohibir por cada parte, así como también, sus importaciones y exportaciones. También restringe la producción y utilización de ciertos productos químicos el Anexo B.
Convenio de Rotterdam	El Convenio busca promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el ambiente. El Convenio establece un procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (CFP) para la importación de productos químicos peligrosos, en el cual el país exportador debe informar al país importador cuáles son los riesgos de esa sustancia, en caso de que existan.
Convenio de Minamata	El Convenio de Minamata tiene como objetivo proteger la salud humana y al ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Para ello, busca abordar la gestión del mercurio en su ciclo de vida completo y regular, restringir o prohibir todas las operaciones y actividades donde la acción humana intermedia su uso.

Legislación Nacional	
Ley N.º 23.922/91	Aprueba Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
Ley N.º 26.664/11	Aprueba enmienda al convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscripta en Ginebra, Confederación Suiza.
Ley N.º 26.011/05	Aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Ley N.º 24.051/92 Ley de Residuos Peligrosos	Ley de Residuos Peligrosos: Establece etapas de generación, manipulación, transporte y tratamiento. En Anexo I adjunta tipos de residuos peligrosos según corrientes (origen) y por contenido de cierto constituyente.
Decreto reglamentario N.º 831/93	Reglamenta la Ley 24.051.
Resolución SRNyAH N.º 224/94	Define los residuos peligrosos en términos de niveles de riesgo. Establece los requerimientos que deben tener en cuenta: Generadores y Operadores; Transportistas y Tratadores. También se definen responsabilidades específicas, sanciones y multas.
Resolución 197/19	Crea el procedimiento de Régimen Simplificado de Generadores Menores de Residuos Peligrosos, en los términos de la Ley N.º 24.051, artículo 14 del Decreto 831/93, cuyas actividades de manipulación, transporte, tratamiento y/o disposición final se desarrollen conforme el Plan de Gestión previsto en el Anexo I.
Ley N.º 25.670/02	Regula Presupuestos Mínimos para la gestión y eliminación de PCBs, con el objetivo de fiscalizar las operaciones asociadas a los PCBs, la descontaminación o eliminación de aparatos que contengan PCBs, eliminación de PCBs usados, prohibición de ingreso al país de PCBs y prohibición de producción y comercialización de los PCBs (Decreto de promulgación N.º 2413/02 - Publicación Boletín Oficial N.º 30029).
Ley N.º 25.612/02	Establece presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios. Deroga en art. 60 la ley 24.051.
Resolución MArDS N.º 522-E/16	Enuncia Gestión de Residuos Especiales de Generación Universal (REGU), siendo estos todo aquel cuya generación devenga del consumo masivo y por sus consecuencias ambientales o características de peligrosidad, requieran de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada de otros residuos. Incluye los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES), pilas, baterías, envases que en virtud de la sustancia que contuvieron posean características de peligrosidad, entre otros.
Resolución MArDS N.º 189/2019	Crea mecanismo para simplificar los procedimientos para transporte entre provincias.
Resolución MArDS N.º 522/2016	Establece objetivos, definiciones y lineamientos para el desarrollo de una Estrategia Nacional referida al Manejo Sustentable de estos residuos, que incorpora la responsabilidad posconsumo de los productores (REP).

3.1.7 Gestión de Emisiones Gaseosas

Tabla 6 - Normativa referida a Gestión de Emisiones Gaseosas

Convenios Internacionales	
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)/94	El objetivo es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se firma el Protocolo de Kioto donde se acuerda una reducción de al menos un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2008-2012 en comparación con las de 1990.
Convenio de Viena para la Protección de la capa de Ozono/01	Establece que las partes cooperarán mediante la investigación e intercambio de información de manera de comprender y evaluar mejor los efectos de las actividades humanas sobre la capa de ozono. Además, que se adoptarán las medidas legislativas necesarias para controlar, limitar, reducir o prevenir las actividades que tengan efecto en la capa de ozono. Los objetivos se encuentran en el Protocolo de Montreal.
Acuerdo de París (2016)	Establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global. Su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto.
Legislación Nacional	
Ley N.º 23.724/89	Aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la capa de Ozono. Establece las definiciones, obligaciones generales, entre otros.
Ley N.º 20.284/73	Conservación y control de la contaminación atmosférica. Salud pública, higiene y sanidad, bienestar social, protección del ambiente humano y contaminación ambiental. No está reglamentada, pero contiene estándares de calidad.
Ley N.º 24.295/93	Aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Ley N.º 25.438/01	Aprueba el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el fin de reducir emisiones gaseosas al ambiente.
Ley N.º 25.562/09	Establece los Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema.
Ley N.º 27.137/15	Establece enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, con nuevo período de compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Ley N.º 27.270/16	Aprueba el Acuerdo de París
Ley N.º 27.520/19	Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Decreto Reglamentario N.º 831/93	Indica estándares de emisiones gaseosas de fuentes fijas y niveles guía para sustancias peligrosas. Reglamentario de la Ley 24.051 de residuos.

Decreto Reglamentario N.º 779/95	Decreto reglamentario de la ley N.º 24.449 correspondiente a la Ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial, donde establece medición de emisiones de vehículos livianos equipados con motores ciclo Otto, medición de emisiones de partículas visibles (humo) de motores Diesel y de vehículos.
Decreto N.º 1.030/20	Apruébase la Reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global N° 27.520.

3.1.8 Ruidos

Tabla 7 - Normativa referida a Ruidos

Legislación Nacional	
Código Civil	En el Art. 2618 estipula que “las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización administrativa para ellas”.
Ley N.º 19.587/72	Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Establece protección, prevención y concientización referido al riesgo del trabajador, estableciendo en los arts. 6 y 7 que las reglamentaciones deberán considerar el ruido y las vibraciones entre otros factores físicos.
Decreto N.º 351/79	Reglamenta a la ley N.º 19.587, estableciendo que si bien el límite máximo tolerado es de 90 dBA (Anexo V), este decreto considera los 85 dBA como un nivel de precaución.

3.1.9 Energía

Tabla 8 - Normativa referida a Energía

Legislación Nacional	
Ley N.º 24.065/91	La infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y distribución de energía eléctrica deben adecuarse a las medidas destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados.
Ley N.º 19.552/72	En el artículo 3 se establece que la servidumbre del electroducto afecta el terreno y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para construir y operar un sistema de transmisión de energía.
Disposición N.º 57/17	Establece que los beneficiarios del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica podrán solicitar la aplicación de los beneficios otorgados en los respectivos certificados de inclusión en el citado régimen, de acuerdo con la Res. N.º 72/16.

3.1.10 Suelos

Tabla 9 - Normativa referida a Suelos

Convenios Internacionales	
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación	Adopta el Plan de Acción para Combatir la Desertificación. El objetivo es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación; la prevención o reducción de la degradación de tierras y recuperación de tierras desertificadas.
Legislación Nacional	
Ley N.º 24.701/96	Aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, entendiéndose como la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas.
Ley N.º 22.428/81	Establece preservación del Recurso Suelo.
Decreto Reglamentario N.º 681/81	Establece la importancia de la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.

3.1.11 Áreas Protegidas

Tabla 10 - Normativa referida a Áreas Protegidas

Legislación Nacional	
Ley N.º 22.351/80	Regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (parques, reservas nacionales y monumentos naturales) y establece que se deben mantener las áreas que sean representativas de una región fitozoogeográfica sin alteraciones, prohibiéndose en ellos toda explotación económica.
Ley N.º 24.702/96	Establece diversas especies como Monumentos Naturales.
Decreto N.º 2.148/90	Refiere a las Reservas Naturales Estrictas y a la conservación de la diversidad biológica argentina.
Decreto N.º 453/93	Introduce dos nuevas categorías, las Reservas Naturales Silvestres y las Reservas Naturales Educativas.

3.1.12 Flora, Fauna y Bosque Nativo

Tabla 11 - Normativa referida a Flora, Fauna y Bosque Nativo

Convenios Internacionales	
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) o “Convenio de Bonn”	Es un tratado intergubernamental, que se ocupa de la conservación de la vida silvestre y de los hábitats a una escala global. Persigue conservar las especies marinas y terrestres y de aves migratorias en todo su ámbito de aplicación.

Convenio de Ramsar	Su principal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro)	Establece los objetivos de conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos
Legislación Nacional	
Ley N.º 23.918/91	Aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres estableciendo definiciones, principios fundamentales, las especies migratorias amenazadas (apéndice I), especies migratorias de objeto de acuerdos (apéndice II), directivas sobre la conclusión de acuerdos, entre otros.
Ley N.º 23.919/91	Aprueba la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar).
Ley N.º 26.331/07	Establece presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos.
Ley N.º 24.375/94	Adhiere al convenio sobre la protección de la Diversidad Biológica (Río de Janeiro el 5/06/92).
Ley N.º 13.273/48	Establece la defensa, mejoramiento y ampliación de bosques. Modificadas por la Leyes 14.008, 20.531, 20.569 y 21.990.
Decreto reglamentario N.º 91/09	Establece reglamentación de la Ley N.º 26.331.
Decreto N.º 522/97	Establece especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
Resolución N.º 211/22	Se adopta la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI).

3.1.13 Tránsito Vehicular y Seguridad Vial

Tabla 12 - Normativa referida a Tránsito Vehicular y Seguridad Vial

Legislación Nacional	
Ley N.º 24.449/94	Ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Dicha ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito.
Decreto N.º 779/95	Decreto reglamentario de la Ley N.º 24.449. Establece en el Anexo "L" el Sistema de Señalización Vial Uniforme.
Ley N.º 24.653	Instituyó el nuevo régimen al que deberá someterse el Transporte por Automotor de Cargas de carácter nacional e internacional en la medida que no se encuentre reglado por Convenios Internacionales.

Legislación Nacional	
Decreto N.º 1035/02	Reglamentación de la Ley N.º 24.653. Principios Generales Políticas del Transporte de Cargas. Registro Único del Transporte Automotor. Régimen Sancionatorio. Disposiciones Generales.

3.1.14 Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional

Tabla 13 - Normativa referida a Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional

Legislación Nacional	
Ley N.º 19.587/72	Ley General de Higiene y Seguridad Laboral. El objetivo es proteger y preservar a los trabajadores, como así también la disminución de accidentes y enfermedades.
Ley N.º 24.028/91	Establece presupuestos de responsabilidad. Accidentes, acción contra terceros, indemnizaciones, asistencia médica, fondo de garantía, entre otras.
Ley N.º 24.557/95	Ley de prevención de riesgos del trabajo. Seguro por accidentes y enfermedades del trabajo.
Decreto reglamentario N.º 1.338/96	Reemplaza Títulos II (Prestaciones de Medicina y de Higiene y Seguridad en El Trabajo) y VIII (Estadísticas de accidentes y enfermedades del trabajo) del Anexo I del Decreto N.º 351/79. Reemplaza Anexo VIII del decreto 351/79.
Decreto reglamentario N.º 1.792/92	Reglamentario de la Ley 24.028/91.
Decreto reglamentario N.º 351/79	Actualiza métodos y normas técnicas referidas a Medidas de Seguridad en el trabajo. Trabajos de Soldadura se encuentran comprendidos en los artículos 152 a 159, en ellos se establece indicaciones de características constructivas con adecuada ventilación e iluminación, medidas de seguridad, necesidad de capacitaciones y obligaciones a cumplir.
Decreto reglamentario N.º 170/96	Fija criterios de la estructura del plan de Mejoramiento (Art. 4 de la ley) y métodos de solución de conflictos acordes a la relación que une las partes.
Decreto N.º 1.057/03	Modifica Decreto 911/96 y 351/79 con la finalidad de facultar a la superintendencia de riesgos del trabajo para actualizar las especificaciones técnicas de los reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo.
Decreto N.º 911/96	Establece reglamento de Higiene y Seguridad en el trabajo para la industria de la construcción.
Resolución N.º 523/95	Establece especificaciones de Agua para Bebida, modificatoria de Art. 58 del Decreto 351/79.
Resolución SRT N.º 299/11	Establece reglamentaciones que procuran la provisión de elementos de protección personal confiables a los trabajadores.
Resolución SRT N.º 463/09 y N.º 529/09 (modificatoria de 463/09)	Establece solicitud y contrato Tipo de Afiliación a ART, registro de Cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo y relevamiento general de riesgos laborales.

Legislación Nacional	
Resolución SRT N.º 103/05	Establece sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el Trabajo.
Resolución N.º 295/03	Establece especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de cargas. Modifica Decreto 351/79.
Disposición N.º 02/83 de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo	Establece que los elementos de higiene personal deben quedar a consideración de servicios de Medicina y de Higiene y Seguridad. Aclaratorio de Art. 42, Anexo I del Decreto 351/79 “solamente refiere a características constructivas del establecimiento.”

3.1.15 Igualdad de Género

Tabla 14 - Normativa referida a Aspectos Sociales

Convenios Internacionales	
Ley N.º 23.179	La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada por Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979, y suscripta por la República Argentina el 17 de julio de 1980, cuyo texto forma parte de la presente Ley.
Ley N.º 24.632	Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).
Legislación Nacional	
Ley N.º 24.012	Ley de cupo Femenino.
Ley N.º 26.618	Matrimonio Civil. Matrimonio entre las personas del mismo sexo.
Ley N.º 25.673	Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud.
Ley N.º 26.150	Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley N.º 26.364	Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Ley N.º 26.485 Violencia de Género	Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Ley N.º 26.743	Ley de Identidad de Género. Reconoce el derecho de toda persona a desarrollarse libremente conforme a su identidad de género.
Ley N.º 26.842 que modifica Ley N.º 26.364	Trata de personas y asistencia a sus víctimas. Prevención y sanción. Código Penal y Código Procesal Penal.
Ley N.º 27.210	Créase el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el que tendrá como misión garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones

	interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en ésta y otras normas relacionadas con la problemática.
Ley N.º 27.410	Concientización sobre la violencia de género.
Ley N.º 27.499	Ley Micaela – Capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Ley N.º 27.501	Incorpora al artículo 6º de la ley N.º 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en el espacio público. Agrega, así, el inciso g) como una modalidad de la violencia contra las mujeres.
Ley N.º 27.533, modificación de Ley 26.485	Adiciona a la definición de violencia contra las mujeres, aquella que afecta la participación política (art.2). Define la violencia política como aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer (art.3). Define violencia pública-política contra las mujeres (art.4).
Decreto N.º 1.363/97	Revisión de los regímenes que regulan la relación de empleo público a fin de garantizar la igualdad de oportunidades.
Decreto N.º 522/17	Reglamenta la Ley N.º 26.879, de Creación del Registro Nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
Decreto N.º 721/20	Cupo Laboral. La Ley establece que, en el sector público nacional, en los términos del Art. 8 de la ley N.º 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no menor al 1% de la totalidad de estos por personas travestis, transexuales, transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Dicho porcentaje deberá ser asignado a las mencionadas personas en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes.
Decreto N.º 123/21	Crea el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios en el ámbito del Programa Interinstitucional de abordaje integral de las violencias extremas por motivos de género.
Resolución N.º 69/20	La resolución garantiza que las personas con discapacidad sigan manteniendo sus prestaciones básicas a distancia a través de teletrabajo, telefonía o utilizando cualquier otro dispositivo técnico, que permita la continuidad de esta

3.1.16 Discapacidad

Tabla 15 - Normativa referida a personas con discapacidad

Convenios Internacionales	
Ley N.º 26.378/08	Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad.
Legislación Nacional	
Ley N.º 22.431/81	Sistema de protección integral de los discapacitados.
Ley N.º 24.901/97	Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad.

Resolución N.º 69/20	La resolución garantiza que las personas con discapacidad sigan manteniendo sus prestaciones básicas a distancia a través de teletrabajo, telefonía o utilizando cualquier otro dispositivo técnico, que permita la continuidad de esta
Ley N.º 26.522/09	Inclusión del recuadro en el que se encuentra la interpretación en lengua de señas en las transmisiones de Presidencia de la Nación.
Ley N.º 26.858/13	Derecho de acceso, deambulación y permanencia. Personas con discapacidades acompañadas de Perro Guía o de Asistencia.
Ley N.º 24.314/94	Accesibilidad a personas con movilidad reducida

3.1.17 Población Migrante

Tabla 16 - Normativa referida a población migrante

Legislación Nacional Convenios Internacionales	
LEY N.º 26.202	Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Legislación Nacional	
Ley N.º 25.871/03	Política Migratoria Argentina

3.1.18 Pueblos Indígenas y sus Comunidades

Tabla 17 - Normativa relacionada a Pueblos Indígenas y sus Comunidades

Convenios Internacionales	
Convenio N.º 169 de la OIT	El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, también conocido como Convención 169 de la OIT o Convenio 169 de la OIT, es una convención adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. A 2016, ha sido ratificado por 22 estados. El Convenio 169 de la OIT es el más importante instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas. Su fuerza radica y depende, de todos modos, de un alto número de naciones ratificantes.
Resolución N.º 61/295 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas	Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos ⁴ y las normas internacionales de derechos humanos
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas	La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aplica a los pueblos indígenas de las Américas. La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio fundamental para determinar a quienes se aplica la presente Declaración.

Legislación Nacional	
Constitución Nacional	En el Artículo 75 inc. 17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.
Ley N.º 23.302 Comunidades Indígenas	Crea el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) con el propósito de asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente
Ley N.º 24.071	Aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Ley N.º 24.544	Aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, suscrito durante la II Cumbre Iberoamericana de jefes de Estados y de Gobierno.
Ley N.º 25.517	Decreto reglamentario N.º 701/2010. Estable que deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos mortales de integrantes de pueblos, que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
Ley N.º 26.160	En el año 2021 ha perdido vigencia, siendo reemplazada por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes.
Ley N.º 26.331	Decreto reglamentario N.º 91/2009 sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible de bosques nativos, y se mencionan a los pueblos originarios y sus comunidades.
Ley N.º 26.602	Incluye en su Capítulo XI los artículos 52, 53 y 54 que consagraron la Educación Intercultural Bilingüe (EIB).
Ley N.º 26.994 Código Civil y Comercial de la Nación	Aprueba la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en el cual se mencionan los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades.
Ley N.º 27.118	Declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena.
Ley N.º 27.246	Aprueba el Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización.
Decreto N.º 700	Crea la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena.
Resolución N.º 4.811/96	Crea el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci).

Resolución N.º 328/10	Crea en el ámbito del INAI el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas (Re.No.Pi.).
------------------------------	---

3.1.19 Patrimonio Cultural, Arqueológico y Lugares Históricos

Tabla 18 - Normativa referida a Patrimonio Cultural y Arqueológico

Convenios Internacionales	
Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural	Aprobada por la UNESCO en 1972. Crea un Fondo para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de Valor Universal Excepcional, denominado "el Fondo del Patrimonio Mundial".
Convención sobre Defensa del Patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas	La Convención tiene como objeto la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las naciones americanas, para: a) impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales; y b) promover la cooperación entre los Estados americanos para el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales.
Legislación Nacional	
Ley N.º 12.665	Ley de defensa del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación.
Ley N.º 21.836	Aprueba la "Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural". Establece las definiciones del patrimonio cultural y natural e incluye texto del Convenio.
Ley N.º 25.568	Aprueba la Convención sobre Defensa del Patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas.
Ley N.º 25.743	Establece que el patrimonio Arqueológico y Paleontológico forma parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.
Ley N.º 27.103	Promulga modificaciones de la Ley N.º 12.665 y crea la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos.
Decreto reglamentario N.º 2.525/15	Aprueba la reglamentación de la Ley N.º 12.665 y su modificatoria Ley N.º 27.103 Establece que la comisión nacional de monumentos, de lugares y de bienes históricos, dependerá del Ministerio de Cultura.
Decreto reglamentario N.º 1.022/04	Establece que el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y El Museo argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" serán autoridades de aplicación Nacional en relación con la preservación y protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Creación de Registros Nacionales de yacimientos, colecciones, entre otros.

3.1.20 Derecho a la Información Ambiental

Tabla 19 - Normativa referida a acceso a la información ambiental

Legislación Nacional	
Ley N.º 25.831	Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como

Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental	provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
Ley N.º 26.653 Acceso a la Información pública	Accesibilidad de la Información en las Páginas Web. Autoridad de Aplicación. Plazos. Reglamentación. La Ley refiere a respetar en los diseños de las páginas Web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el acceso a sus contenidos, a todas las personas con discapacidad con el objeto de garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato, evitando así todo tipo de discriminación.
Ley N.º 27.275 Derecho de Acceso a la Información Pública	El objetivo de la Ley es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Establece principios, plazos, define excepciones y mecanismos de solicitud de información y vías de reclamo, entre otros aspectos.
Ley N.º 27.566	Aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)
Decreto N.º 206/17	Decreto reglamentario de la Ley N.º 27.275/16.

3.1.21 Reasentamiento Involuntario

Tabla 20 - Normativa referida a Reasentamiento Involuntario

Legislación Nacional	
Ley N.º 21.499/77	Ley Nacional de Expropiaciones establece las figuras que podrán actuar como expropiantes y los bienes que podrán ser expropiados para la realización de una obra por razones de utilidad pública. Se refiere a la utilidad pública como fundamento de expropiación, los sujetos que pueden actuar como expropiantes, el objeto expropiable, la indemnización, el procedimiento judicial y el plazo de la expropiación.
Ley N.º 21.626/01 y su Decreto Reglamentario N.º 1.487/01	La “Ley Orgánica del Tribunal de Tasaciones de la Nación” desarrolla las funciones que establece la Ley N.º 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional que consisten fundamentalmente en el control interno posterior, integral e integrado de las actividades desarrolladas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y orientado tal control a los principios de eficiencia, eficacia y economía.

3.3. Marco de Política Ambiental y Social del BID (MPAS)

En función que el diseño y preparación de la nueva operación a financiarse por el BID (AR-L1361) debe considerar el nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Organismo, en esta sección se

presenta un resumen de las diez **Normas de Desempeño Ambiental y Social** (NDAS) que deberán contemplarse durante la preparación e implementación del Programa.

El objetivo general del MPAS es contribuir al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, así como aumentar la sostenibilidad de los proyectos de inversión financiados por el BID, mediante la aplicación de normas sólidas de gestión de riesgos ambientales y sociales, enfocándose en temas relacionados con la desigualdad social, el cambio climático y el agotamiento del capital natural.

A continuación, se presentan los principales aspectos de las NDAS, y en la **Tabla 21** se indica, a modo de resumen, la aplicación de las diez Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID durante la preparación y ejecución del Programa.

En el **Capítulo 5** se realiza el **Análisis de Brechas** a partir de la evaluación de los procedimientos, procesos, recursos y capacidad institucional del Organismo Ejecutor, y de la legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en el MPAS y en las NDAS 1 a 10 del BID.

3.1.22 NDAS 1 – Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales

Esta Norma proporciona la base para todas las demás Normas porque brinda orientaciones sobre cómo evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales. En ella se define la importancia de contar con un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS).

Como requisito esta Norma establece que el prestatario, en coordinación con otros organismos gubernamentales y terceros, según corresponda, deberá emprender un proceso de evaluación ambiental y social, y establecer y mantener un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) acorde a la naturaleza y escala del proyecto y en consonancia con su nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales.

3.1.23 NDAS 2 - Trabajo y Condiciones Laborales

Esta Norma reconoce que la búsqueda del crecimiento económico mediante la creación de empleo y la generación de ingresos debe ir acompañada de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, según indican los convenios de la OIT.

El alcance de aplicación de esta Norma de Desempeño depende del tipo de relación de empleo entre el prestatario y el trabajador del proyecto. Se aplica a los trabajadores del proyecto contratados directamente por el prestatario (trabajadores directos), a los contratados a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del proyecto durante un tiempo considerable (trabajadores contratados) y a los contratados por los proveedores principales del prestatario (trabajadores de la cadena de suministro principal).

3.1.24 NDAS 3 - Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación

Propone la adopción de medidas, tecnologías y prácticas de mitigación adecuadas para utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz, prevenir y controlar la contaminación, y evitar y minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con tecnologías y prácticas difundidas a escala internacional.

El prestatario deberá aplicar medidas técnica y financieramente viables y eficaces para mejorar su eficiencia en el consumo de energía, agua y otros recursos e insumos importantes. Además, durante el diseño y operación del proyecto, deberá considerar alternativas para evitar o minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, y la prevención de contaminación de los componentes aire, agua y suelo.

3.1.25 NDAS 4 - Salud y Seguridad de la Comunidad

Esta Norma reconoce que las actividades, los equipos y la infraestructura de un proyecto pueden aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos, incluidos los causados por amenazas naturales y el cambio climático. Además, las comunidades que ya están sometidas a los impactos adversos de amenazas naturales y el cambio climático pueden experimentar también una aceleración o intensificación de dichos impactos como consecuencia de las actividades del proyecto.

Los requisitos sobre salud y seguridad laboral para los trabajadores se presentan en la NADS N° 2, las normas ambientales para evitar o minimizar los impactos en la salud humana y el medio ambiente como resultado de la contaminación se presentan en la NDAS N° 3, los requisitos para abordar los riesgos de violencia sexual y de género en casos de conflicto comunal e influjos de trabajadores externos en la NADS N° 9; y los requisitos sobre consulta con las partes interesadas y divulgación de información en la NADS N° 10.

3.1.26 NDAS 5 - Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario

Aborda los impactos de la adquisición de tierras relacionadas con un proyecto, incluidas las restricciones sobre el uso del suelo y el acceso a bienes y recursos naturales, que pueden causar el desplazamiento físico (reubicación, pérdida de tierras o morada) o el desplazamiento económico (pérdida de tierras, bienes o restricciones en el uso del suelo, bienes y recursos naturales), lo que ocasiona la pérdida de fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia.

En la aplicación de esta Norma también se deben considerar los requisitos relativos a pueblos indígenas, igualdad de género y participación de las partes interesadas, de conformidad con las NDAS 7, 9 y 10, respectivamente.

3.1.27 NDAS 6 - Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos

Los requisitos enunciados en la presente Norma de Desempeño se basan en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que define la biodiversidad como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

Define a los servicios ecosistémicos como los beneficios que las personas, incluidas las empresas, obtienen de los ecosistemas, y distingue cuatro tipos de servicios ecosistémicos: (i) los servicios de aprovisionamiento, que son los productos que las personas obtienen de los ecosistemas; (ii) los servicios de regulación, que son los beneficios que las personas obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas; (iii) los servicios culturales, que son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas; y (iv) los servicios de apoyo, que son los procesos naturales que mantienen a los demás servicios.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Norma, en función del proceso de identificación de riesgos e impactos, se aplica a proyectos (i) ubicados en hábitats modificados, naturales y de importancia crítica; (ii) que pueden afectar a servicios ecosistémicos gestionados directamente por el prestatario o sobre los que este tiene una influencia considerable, o que dependan de dichos servicios; o (iii) que incluyan la producción de recursos naturales vivos (por ejemplo, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura).

3.1.28 NDAS 7 - Pueblos Indígenas

Esta Norma reconoce que los pueblos indígenas suelen contarse entre los segmentos más marginados y vulnerables de la población. En muchos casos, su situación económica, social y jurídica limita su capacidad de defender sus derechos e intereses sobre las tierras y los recursos naturales y culturales, y puede limitar su capacidad de participar en un desarrollo que esté en consonancia con su cosmovisión y disfrutar de sus beneficios.

A los efectos del presente Marco, el término “pueblos indígenas” se emplea de modo genérico para designar a pueblos social y culturalmente diferenciados que poseen algunas de las siguientes características en diversos grados: i) Autoidentificación como miembros de un grupo cultural indígena distintivo, así como el reconocimiento de esta identidad por otros; ii) Un apego colectivo a hábitats geográficamente demarcados o a territorios ancestrales en la zona del proyecto, así como a los recursos naturales en dichos hábitats y territorios; iii) Leyes e instituciones culturales, económicas, sociales o políticas consuetudinarias distintas de las de la sociedad o cultura dominante; iv) una lengua o dialecto propios, con frecuencia diferente de la o las lenguas oficiales del país o la región en que residen.

3.1.29 NDAS 8 - Patrimonio Cultural

De conformidad con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, esta Norma tiene el objetivo de asegurar la protección del patrimonio cultural al llevar a cabo actividades en el marco de sus proyectos.

A los efectos de la presente Norma de Desempeño, el término “patrimonio cultural” se refiere a (i) formas tangibles del patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles, propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor arqueológico, paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso; (ii) características naturales u objetos tangibles únicos que representan valores culturales, como los bosques, rocas, lagos y cascadas sagrados; y (iii) ciertas formas intangibles de cultura para las que se haya propuesto un uso con fines comerciales, como los conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de comunidades que representan estilos de vida tradicionales.

3.1.30 NDAS 9 - Igualdad de Género

Esta Norma de Desempeño reconoce, independientemente del contexto cultural o étnico, el derecho a la igualdad entre personas de todos los géneros según se la establece en los convenios internacionales correspondientes³. La búsqueda de igualdad requiere acciones en pro de la equidad,

³ Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la

lo que implica suministrar y distribuir beneficios o recursos de una forma que reduzca las brechas existentes, en reconocimiento de que la existencia de dichas brechas puede perjudicar a personas de todos los géneros.

3.1.31 NDAS 10 - Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información

Reconoce la importancia de una interacción abierta y transparente entre el prestatario y las partes interesadas, especialmente las personas afectadas por el proyecto, como elemento clave que puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, aumentar su aceptación y contribuir sustancialmente a su elaboración y ejecución con éxito. Asimismo, es congruente con el objetivo de implementar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos Ambientales.

La participación de las partes interesadas es un proceso incluyente que se lleva a cabo a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. A los efectos de esta Norma de Desempeño, el término “parte interesada” se refiere a: i) personas o grupos que y están afectados o es probable que se vean afectados por el proyecto (“personas afectadas por el proyecto”), y ii) pueden tener interés en el proyecto (“otras partes interesadas”).

3.1.32 Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID aplicables al Programa

En la **Tabla 21** se indica, a modo de resumen, la aplicación de las diez Normas de Desempeño Ambiental y Social del BID durante la preparación y ejecución del Programa.

Tabla 21 - Normas de Desempeño BID aplicables al Programa

Norma de Desempeño Ambiental y Social BID	Aplicación en el Programa		Justificación
	Sí	No	
Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales (NDAS 1)	x		Dado que la operación es de tipo Préstamo Basado en Resultados (PBR) ⁴ , corresponde al Banco evaluar si el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) del MDS (procedimientos documentados, recursos, capacidad institucional y el marco de legislación a

Violencia contra la Mujer (1993), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Medidas de Prevención del Delito y de Justicia Penal para Eliminar la Violencia contra la Mujer (1998), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1999), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) y los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos con Relación a la Orientación Sexual y la Identidad de Género (2006, actualizados en 2017) y el Convenio Núm. 190 de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso.

⁴ Un Préstamo Basado en Resultados (PBR) se trata de un préstamo de inversión que financia los costos de las actividades (por ejemplo, bienes, obras y servicios) relacionadas con el logro de esos resultados y se desembolsa una vez que estos se han alcanzado y verificado adecuadamente.

		<p>nivel Nación), es adecuado para ejecutar las actividades que se prevé financiar de manera acorde con los requisitos de las diez NDAS.</p> <p>El Programa se clasifica como categoría B, debido a que las actividades a desarrollar generarán impactos ambientales y sociales negativos moderados, localizados y de corto plazo. Como parte del Análisis, se identificarán los potenciales impactos sociales y ambientales por tipología de obras, de acuerdo con lo propuesto en los componentes de la operación.</p> <p>En este contexto, se elabora el presente Análisis de Brechas, el cual será validado con el Organismo Ejecutor, para posteriormente acordar los ajustes al SGAS a través de un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS).</p>
Trabajo y Condiciones Laborales (NDAS 2)	x	<p>Las obras por ejecutar tienen asociados riesgos laborales y de seguridad y salud ocupacional típicos de obras civiles (remodelaciones, mejoras de vivienda interna, mejoramiento de plazas, etc.). La evaluación del SGAS del MDS incluirá la revisión de los procedimientos, procesos, recursos, capacidad institucional y legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en la NDAS 2 relacionados con seguridad y salud de los trabajadores y con condiciones labores, la no discriminación y la libertad de asociación y negociación colectiva, la existencia de un mecanismo de quejas y reclamos para los trabajadores, así como la existencia de un Procedimiento de Gestión Laboral.</p>
Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación (NADS 3)	x	<p>En función a la tipología de actividades a ser desarrolladas, y a Análisis Ambientales y Sociales de operaciones en ejecución entre el MDS y el Banco correspondiente a la AR-L1306, se identificaron los siguientes impactos ambientales y riesgos de contaminación en la fase constructiva: (i) desplazamiento físico de familias por apertura de viales o esponjamiento; (ii) accidentes ocupacionales, viales, y comunitarios durante la fase constructiva de las obras; (iii) alteración de la calidad del aire por emisiones de gases y material particulado por actividades propias de la fase constructiva como acopio de material, movimiento de maquinaria y vehículos, (iv) incremento de niveles de ruido y vibraciones debido al transporte de materiales y a operación de maquinarias para excavación, limpieza de terreno, zanjeo y desarrollo de obras civiles en general, (v) contaminación de la napa freática y escorrentía superficial por actividades de limpieza, movimiento de suelos, remoción de cobertura o potenciales derrames</p>

		<p>accidentales (hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas utilizadas en la obra), (vi) alteración de la composición del suelo por remoción de cubierta vegetal y arbórea, movimiento de suelos, excavaciones y relleno post-excavación. Estos impactos serán desarrollados como parte del Análisis de Brechas que será desarrollado en la etapa de preparación.</p> <p>Este Análisis incluye una evaluación de los procedimientos, procesos, recursos, capacidad institucional y legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en la NDAS 3.</p>
Salud y Seguridad de la Comunidad (NADS 4)	x	<p>El riesgo de desastres naturales se ha identificado preliminarmente como moderado, debido a que las zonas donde se desarrollarán las actividades (Barrios Populares y en áreas formales adyacentes en Provincias y Municipios de Argentina) identificadas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABA), están expuestas a condiciones entre moderadas y altas de inundación por desbordamiento fluvial, deslizamiento y sismo.</p> <p>La criticidad y vulnerabilidad del componente de infraestructura del proyecto se clasifica como moderado, según los criterios incluidos en la tabla de criticidad mejoramiento de vivienda. No se esperan incrementos de las condiciones actuales de amenazas naturales o de la vulnerabilidad de las comunidades locales; por el contrario, las actividades se enfocan a la reducción de la vulnerabilidad.</p> <p>Este Análisis incluye la revisión de los procedimientos, procesos, recursos, capacidad institucional y legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en la NDAS 4.</p>
Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario (NDAS 5)	x	<p>El “Componente II. Mejora de las condiciones habitacionales de los HV” y el “Componente III. Integración socio urbana de BP” del Programa, incluyen las actividades que podrían implicar el desplazamiento físico y/o económico temporal y/o permanente de HV residentes en BP y en sus áreas formales adyacentes con déficit habitacional.</p> <p>Este Análisis incluye la revisión de los procedimientos, procesos, recursos, capacidad institucional y legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en la NDAS 5 en cuanto a la planificación y ejecución de reasentamiento y restablecimiento de medio de subsistencia.</p>
Conservación de la Biodiversidad y Gestión	x	<p>No se prevén intervenciones dentro de Áreas Protegidas a Nivel Nacional o Local. No obstante,</p>

Sostenible de Recursos Naturales Vivos (NDAS 6)			<p>este Análisis incluye la revisión de los procedimientos, procesos, recursos, capacidad institucional y legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en la NDAS 6 especialmente en cuanto a identificación de hábitat modificado crítico y evaluación de impactos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos.</p> <p>No se financiarán proyectos con impacto significativo en hábitat crítico o dentro de Áreas Protegidas.</p>
Pueblos Indígenas (NDAS 7)		x	<p>El Programa no se desarrollará en territorios indígenas, ni financiará actividades que tengan el potencial de generar impactos adversos significativos sobre pueblos indígenas.</p>
Patrimonio Cultural (NDAS 8)	x		<p>Dado el alcance nacional del Programa, las intervenciones de los componentes podrían desarrollarse en áreas vinculadas a patrimonio cultural tangible/intangible y, por consiguiente, tener el potencial de generar impactos sobre este. De ser este el caso, deberá procederse de acuerdo con la NDAS 8.</p> <p>Este Análisis incluye la revisión de los procedimientos, procesos, recursos, capacidad institucional y legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en la NDAS 8 en cuanto a la protección del patrimonio cultural y los procedimientos en caso de hallazgos fortuitos.</p>
Igualdad de Género (NDAS 9)	x		<p>El Programa incluye componentes que expresamente incorporan el enfoque de género y diversidades. Asimismo, entre los beneficiarios del Programa se priorizarán los HV localizados en zonas con vulnerabilidad climática mitigable y liderados por mujeres, personas LGTBQ+, adultos mayores, migrantes y/o a cargo de personas con diversidad funcional. Sin embargo, durante la ejecución de obras civiles podrían existir riesgos e impactos referidos al incremento de violencia de género, la exclusión y/o discriminación.</p> <p>Este Análisis incluye la revisión de los procedimientos, procesos, recursos, capacidad institucional y legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en la NDAS 10 en cuanto a la identificación y evaluación de los riesgos e impactos sexuales y de género, y a la evitación, mitigación o compensación de impactos y riesgos asociados.</p>
Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información (NDAS 10)	x		<p>Será requerido llevar adelante un proceso de participación de las partes interesadas y divulgación de la información durante el ciclo de vida del PBR. Dicho proceso iniciará durante la etapa de</p>

		<p>preparación del Proyecto con la divulgación de los resultados de la evaluación del SGAS del MDS entre los actores clave preliminarmente identificados. A tal fin, el OE realizará un mapeo de partes interesadas del Proyecto entre los cuales divulgará el Análisis de Brechas, con objeto de obtener su retroalimentación.</p> <p>Esta instancia tendrá lugar antes del Comité de Políticas Operativas del BID (OPC, por sus siglas en inglés), de tal manera que los resultados sean considerados en el PAAS.</p> <p>Este Análisis incluye la revisión de los procedimientos, procesos, recursos, capacidad institucional y legislación a nivel nacional frente a los requisitos establecidos en la NDAS 10 en cuanto a la participación de las partes interesadas, divulgación de la información y mecanismo de reclamación.</p>
--	--	---

4 Análisis de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales

4.1 Pre-Identificación de Impactos

El objetivo principal del Programa es contribuir a la integración socio urbana, y la mejora de las condiciones habitacionales de los hogares vulnerables.

El Programa se clasifica como Categoría B debido a que algunas actividades a desarrollar generarán impactos ambientales y sociales negativos moderados, localizados y de corto plazo, para los cuales se conocen medidas de mitigación eficaces y fácilmente disponibles. Estarán excluidas actividades que correspondan a Categoría A o riesgo Ambiental y Social Alto.

Según se describe en el Capítulo 2.2, algunas tipologías de obras prevén intervenciones físicas que podrían resultar en impactos y riesgos ambientales y sociales durante la etapa constructiva.

Previo al análisis de impactos, en la **Tabla 22** se realiza, para cada componente y tipología de obra, una primera identificación de la potencialidad de generar impactos ambientales y sociales negativos. Posteriormente, se realiza un análisis detallado de los impactos (**Tabla 23**).

Tabla 22 – Pre-Identificación de posibles Impactos Ambientales y Sociales negativos (Programa AR-L1361)

Tipo de Proyecto por Componente	Potencialidad de generar impactos negativos		Comentarios
	SI	NO	
Componente I: Modernización y Fortalecimiento Institucional en los tres niveles de gobierno			
(i) asistencia técnica para fortalecer las unidades en los procesos técnicos y fiduciarios		x	Las iniciativas relacionadas a brindar asistencia técnica, capacitaciones, financiamiento de estudios, adquisición en materia tecnológica e informática, y el diseño de estrategias para intervenir Barrios Populares incorporando criterios de riesgo climático y social, no se espera que generen impactos negativos sobre el ambiente ni sobre la población.
(ii) capacitaciones de fortalecimiento para las unidades		x	
(iii) contratación de equipos de soporte y adquisición de equipamiento		x	
(iv) estudios para el diseño de estrategias de intervención y herramientas de monitoreo para la prevención de conformación de nuevos asentamientos y/o crecimiento de los existentes		x	

Tipo de Proyecto por Componente	Potencialidad de generar impactos negativos		Comentarios
	SI	NO	
(v) adquisición, desarrollo, mejoramiento, instalación y operación de herramientas y soportes tecnológicos y/o informáticos relacionados con la gestión del Programa		x	proporcionar herramientas para la planificación urbana de manera integral.
(vi) desarrollo de sistemas de procesamiento y gestión de la información climática en articulación con los sistemas existentes		x	
(vii) actualización del RENABAP mediante nuevas tecnologías		x	
(viii) estrategias para intervenir Barrios Populares de forma temprana incorporando criterios de riesgo climático y social		x	
Componente II: Mejora de las condiciones habitacionales de los hogares vulnerables			
Subcomponente II.1. Aumento de la oferta de servicio habitacionales y mejora de las condiciones habitacionales existentes de hogares vulnerables en áreas formales adyacentes a Barrios Populares.			
Subcomponente II.2. Aumento de la oferta de servicios habitacionales y mejora de las condiciones habitacionales existentes de hogares habitacionales en Barrios Populares.			
(i) obras de mejoramiento de vivienda considerando criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica	x		La ejecución de proyectos que contemplen mejoramiento de viviendas incluye obras de infraestructura y de servicios susceptibles de generar impactos socioambientales negativos al medio, si no se contemplan medidas de prevención y mitigación de impactos.
(ii) asistencia técnica y social		x	Actividades que contemplen asistencia técnica y social, y formulación de proyectos no se espera que generen impactos negativos sobre el ambiente, ni sobre la población.
(iii) formulación de proyectos ejecutivos incluyendo cambio climático y sostenibilidad ambiental		x	

Tipo de Proyecto por Componente	Potencialidad de generar impactos negativos		Comentarios
	SI	NO	
(iv) obras para la generación de soluciones habitacionales con enfoque de género y diversidades y que incluyan criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica	x		La ejecución de proyectos que contemplen obras para la generación de soluciones habitacionales incluye intervenciones que podrían generar impactos socioambientales negativos al medio, si no se contemplan medidas de prevención y mitigación de impactos.
(v) servicios para la incorporación de criterios de diseño para viviendas de uso mixto, incluyendo criterios de vivienda verde y resiliente		x	El financiamiento de servicios para mejorar el diseño de proyectos en materia de vivienda de uso mixto, vivienda verde y resiliente de no se espera que generen impactos negativos.
(vi) financiación de conexiones a los servicios públicos	x		Las intervenciones de conexión a servicios públicos podrían generar impactos negativos menores sobre el ambiente y la población aledaña durante la ejecución de los trabajos.
Componente III: Integración socio urbana de Barrios Populares			
Subcomponente III.1. Intervenciones urbanas integradoras, provisión y mejora de infraestructura urbana y equipamiento socio comunitario.			
(i) diagnóstico de línea base		x	La elaboración de diagnósticos y la formulación de proyectos y estudios, no se considera que genere impactos negativos.
(ii) formulación de proyectos ejecutivos y sus estudios preliminares		x	
(iii) construcción de redes de agua potable, cloacas, drenaje pluvial, distribución de gas, electricidad, alumbrado público y servicios de telecomunicaciones	x		La ejecución de proyectos que contemplen construcción de: redes, conexiones intradomiciliarias, sistemas de movilidad, podrían generar impactos socioambientales negativos al medio, si no se contemplan medidas de prevención y mitigación de impactos.
(iv) construcción de conexiones intradomiciliarias	x		
(v) construcción de sistemas de movilidad	x		
(vi) construcción de espacios públicos seguros y áreas verdes fomentando la incorporación de tecnologías digitales y mapeo en su diseño	x		

Tipo de Proyecto por Componente	Potencialidad de generar impactos negativos		Comentarios
	SI	NO	
(vii) equipamiento urbano inteligente, equipamiento comunitario que incorpore criterios de edificios verdes y las obras complementarias y de mitigación y adaptación al cambio climático requeridas	x		
(viii) construcción y provisión de bienes y servicios para el tratamiento y gestión de los residuos sólidos urbanos	x		
(ix) obras estratégicas que permitan la integración del BP con la ciudad formal	x		
(x) obras tempranas de rápida ejecución para la puesta en marcha de proyectos	x		
Subcomponente III.2. Ordenamiento territorial y seguridad de la tenencia.			
(i) estudios técnicos y legales		x	No se esperan impactos socioambientales negativos producto de la ejecución de las iniciativas contempladas en este Sub-Componente.
(ii) propuestas normativas para la modificación de códigos urbanos		x	
(iii) gastos relacionados con la participación de las comunidades con especial foco en género; planos de mensura		x	
(iv) amojonamientos		x	
(v) incorporación catastral de nuevas parcelas		x	
(vi) regularización legal de lotes para realizar la transferencia de la titularidad del dominio; gastos relacionados a la subdivisión de lotes y viviendas		x	
(vii) gastos relacionados a la regularización de servicios públicos. En este componente se hará un esfuerzo por incorporar nuevas tecnologías tales como <i>blockchain</i> .		x	
Componente IV. Desarrollo socioeconómico y comunitario en Barrios Populares con perspectiva de género y diversidad			
Subcomponente IV.1. Desarrollo socioeconómico de hogares vulnerables en Barrios Populares.			

Tipo de Proyecto por Componente	Potencialidad de generar impactos negativos		Comentarios
	SI	NO	
(i) estudios de diagnóstico social y de brechas de servicios sociales existentes;		x	No se espera que la adquisición de bienes y servicios genere impactos socioambientales.
(ii) acciones para ampliar la cobertura y la participación en los programas sociales;		x	
(iii) la realización de diagnósticos sociales y ambientales;		x	
(iv) el diseño e implementación de planes de desarrollo económico; y		x	
(v) el diseño e implementación de acciones vinculadas a salud, hábitat, educación, género y diversidad, ambiente, entre otras.		x	
Subcomponente IV.2. Fortalecimiento de OSC, unidades económicas y entidades públicas que aporten al desarrollo socio comunitario y productivo de los Barrios Populares			
(i) el diseño e implementación de planes de desarrollo económico incentivando la economía circular		x	No se espera que la adquisición de bienes y servicios genere impactos socioambientales.
(ii) puesta en valor y ampliación de espacios comunitarios	x		Es posible que esta tipología de proyecto genere impactos socioambientales negativos, en caso de que se requieran intervenciones físicas.
(iii) tutorías, formación, capacitación e implementación para la conformación de dispositivos que atiendan problemáticas emergentes en el territorio		x	Las iniciativas en materia de capacitación, fortalecimiento, adquisición de bienes y servicios para el desarrollo socio-comunitario y socioeconómico, no se espera que generen impactos socioambientales negativos.
(iv) provisión de bienes y servicios para el desarrollo socio comunitario y productivo		x	
(v) asistencia técnica y/o financiera para unidades productivas nuevas y fortalecimiento de las existentes		x	
(vi) mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica del barrio y/o vinculada al desarrollo económico local y regional	x		Es posible que esta tipología de proyecto genere impactos socioambientales negativos, en caso de que se requieran intervenciones físicas.

Tipo de Proyecto por Componente	Potencialidad de generar impactos negativos		Comentarios
	SI	NO	
(vii) provisión de bienes y servicios relacionados a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)		x	Las iniciativas orientadas a la adquisición de bienes y servicios vinculadas a la gestión de residuos sólidos urbanos no se espera que generen impactos socioambientales negativos.

4.2 Identificación de Impactos

En la **Tabla 23** se resumen los impactos estimados para las actividades del Programa que contemplan intervenciones de infraestructura asociadas a mejoramiento de condiciones habitacionales e integración social y urbana agrupados en Medio Físico y Biológico, y Medio Socioeconómico. Los impactos se presentan según la tipología de obras prevista en los Componentes del Programa.

En resumen, se prevé la ocurrencia de impactos sobre los medios físico, biológico y socioeconómico durante la etapa de construcción, asociados a la instalación y funcionamiento del obrador, transporte y movimiento de materiales, equipos y maquinarias, excavación y movimiento de suelos, demolición de viviendas, y construcción de infraestructura urbana (viales, de drenaje, saneamiento, eléctrica). Asimismo, se tiene previsto que las intervenciones contempladas producirán reasentamientos (desplazamiento físico y/o económico).

Los potenciales impactos negativos y riesgos ambientales y sociales del Programa se verificarían sólo en pequeña y mediana escala y a nivel local, de corto y mediano plazo, y existen medidas de mitigación viables y conocidas por el Organismo Ejecutor.

Considerando el tipo y magnitud de las intervenciones a financiar por el Programa, se estima que los impactos negativos serán de significancia menor o moderada, no esperándose impactos significativos. Excepto en materia de reasentamiento, que deberán arbitrarse medidas específicas para llevar adelante un proceso adecuado y cuidado, según lo establecido en la NDAS 5 del BID. En este sentido, el OE cuenta con experiencia en implementación de Planes de Reasentamiento.

Tabla 23 – Identificación de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales del Programa AR-L1361

Tipología de obras por Componente	Identificación de impactos	
	Medio Físico y Biológico	Medio Socioeconómico
Componente II: Mejora de las condiciones habitacionales de los hogares vulnerables		
<ul style="list-style-type: none"> Obras de mejoramiento de vivienda considerando criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica. Obras para la generación de soluciones habitacionales con enfoque de género y diversidades y que incluyan criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica. 	(+) Reducción de la vulnerabilidad frente al Cambio Climático. (+) Optimización del recurso energético.	(+) Mejora de las condiciones habitacionales. (+) Mejora de las condiciones habitacionales. (+) Mejora de la accesibilidad a los servicios básicos e infraestructura urbana
	Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos: (-) Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones y material particulado. (-) Contaminación sonora por el incremento de ruido y vibraciones. (-) Riesgo de contaminación del suelo y napas por derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas utilizadas en la obra, o mal manejo de vertidos. (-) Generación de aguas residuales durante la construcción. (-) Afectación de la flora y fauna local por desbroce y movimiento de suelos. (-) Alteración del paisaje.	Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos: (-) Riesgos ocupacionales y comunitarios, riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas (incluyendo COVID-19), riesgos de accidentes viales y uso de maquinaria. (-) Generación de residuos sólidos domiciliarios y peligrosos. (-) Dispersión de plagas y vectores por movimiento de suelo, limpieza de terreno, etc. (-) Afectación del paisaje y usos del suelo establecidos por la obra (por ejemplo: instalación del obrador) (-) Molestias a los vecinos y dificultad en el tránsito vehicular y peatonal. (-) Desplazamiento físico y/o económico temporal y/o permanente de hogares vulnerables residentes en Barrios Populares, y en sus áreas formales adyacentes con déficit habitacional. (-) Interferencias con redes de servicio público ocasionando roturas accidentales y cortes de servicio.

Tipología de obras por Componente	Identificación de impactos	
	Medio Físico y Biológico	Medio Socioeconómico
<ul style="list-style-type: none"> Financiación de conexiones a los servicios públicos. 	(+) Mejora de las condiciones ambientales y eficiencia en la utilización de recursos producto de la formalización en la conexión a servicios públicos, evitando fugas o pérdidas de agua o energía.	(+) Regularización de la conexión a servicios. (+) Mejora de la accesibilidad a los servicios básicos e infraestructura urbana.
	(-) Posible generación de ruidos molestos y vibraciones durante la ejecución de los trabajos.	(-) Molestias en la circulación peatonal. (-) Posible corte temporal en los servicios.
Componente III: Integración socio urbana de Barrios Populares		
<ul style="list-style-type: none"> Construcción de redes de agua potable, cloacas, drenaje pluvial, distribución de gas, electricidad, alumbrado público y servicios de telecomunicaciones. Construcción de conexiones intradomiciliarias. 	(+) Optimización de los recursos de energía y agua. (+) Mejora de las condiciones ambientales y eficiencia en la utilización de recursos evitando fugas o pérdidas de agua o energía. (+) Mayor resiliencia de la infraestructura frente el Cambio Climático.	(+) Acceso a servicios básicos. (+) Acceso a servicios de telecomunicaciones y los beneficios derivados en materia de conectividad que representa. (+) Incremento de la seguridad derivado del alumbrado público. (+) Disminución de la vulnerabilidad de los barrios frente a inundaciones.
	Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos: (-) Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones y material particulado. (-) Contaminación sonora por el incremento de ruido y vibraciones. (-) Riesgo de contaminación del suelo y napas por derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas utilizadas en la obra, o mal manejo de vertidos.	Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos: (-) Riesgos ocupacionales y comunitarios, riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas (incluyendo COVID-19), riesgos de accidentes viales y por uso de maquinaria vial. (-) Generación de residuos sólidos domiciliarios y peligrosos. (-) Dispersión de plagas y vectores por movimiento de suelo. (-) Alteración del paisaje y usos del suelo establecidos por la obra (por ejemplo: instalación del obrador) (-) Conflictos con la población por cortes y/o desvíos en el tránsito,

Tipología de obras por Componente	Identificación de impactos	
	Medio Físico y Biológico	Medio Socioeconómico
	<p>(-) Generación de aguas residuales durante la construcción.</p> <p>(-) Afectación de la flora y fauna local por desbroce y movimiento de suelos.</p>	<p>cambios en el recorrido de transporte público, ruidos, etc.</p> <p>(-) Interferencias con redes de servicio públicos que podrían resultar en roturas accidentales y cortes de servicio.</p> <p>(-) Corte temporal en los servicios.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de sistemas de movilidad. • Construcción de espacios públicos seguros y áreas verdes fomentando la incorporación de tecnologías digitales y mapeo en su diseño. • Equipamiento urbano inteligente, equipamiento comunitario que incorpore criterios de edificios verdes y las obras complementarias y de mitigación y adaptación al cambio climático requeridas. 	<p>(+) Consolidación del tejido urbano.</p> <p>(+) Promoción de la planificación urbana integral.</p> <p>(+) Sostenibilidad de las intervenciones.</p> <p>(+) Reducción de la vulnerabilidad frente al Cambio Climático.</p>	<p>(+) Mejoras en materia de conectividad del barrio.</p> <p>(+) Contribución a la integración socio urbana.</p> <p>(+) Acceso y apropiación del espacio público, áreas verdes y equipamiento comunitario.</p> <p>(+) Promoción de la participación ciudadana.</p> <p>(+) Capacitación de los prestadores de servicios, incentivando la articulación entre actores locales.</p>
	<p>Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos:</p> <p>(-) Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones y material particulado.</p> <p>(-) Contaminación sonora por el incremento de ruido y vibraciones.</p> <p>(-) Riesgo de contaminación del suelo y napas por derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas utilizadas en la obra, o mal manejo de vertidos.</p> <p>(-) Generación de aguas residuales durante la construcción.</p> <p>(-) Afectación de la flora y fauna local por desbroce y movimiento de suelos.</p>	<p>Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos:</p> <p>(-) Riesgos ocupacionales y comunitarios, riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas (incluyendo COVID-19), riesgos de accidentes viales y por uso de maquinaria vial.</p> <p>(-) Generación de residuos sólidos domiciliarios y peligrosos.</p> <p>(-) Dispersión de plagas y vectores por movimiento de suelo.</p> <p>(-) Alteración del paisaje y usos del suelo establecidos por la obra (por ejemplo: instalación del obrador)</p> <p>(-) Conflictos con la población por cortes y/o desvíos en el tránsito, cambios en el recorrido de transporte público, ruidos y vibraciones, etc.</p>

Tipología de obras por Componente	Identificación de impactos	
	Medio Físico y Biológico	Medio Socioeconómico
		<p>(-) Interferencias con redes de servicio públicos que podrían resultar en roturas accidentales y cortes de servicio.</p> <p>(-) Desplazamiento físico y/o económico temporal y/o permanente de hogares vulnerables, en caso de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo ambiental, riesgo físico u ocupando el derecho de vía de espacios a intervenir por el Programa.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Construcción y provisión de bienes y servicios para el tratamiento y gestión de los residuos sólidos urbanos. 	<p>(+) Mejora de la gestión integral de residuos sólidos urbanos del barrio.</p> <p>(+) Desarrollo de iniciativas de tratamiento y valorización de residuos.</p>	<p>(+) Acceso a servicios de gestión de residuos.</p> <p>(+) Mejora de las condiciones de higiene del barrio.</p> <p>(+) Concientización de la población sobre la valoración de residuos.</p>
	<p>Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos:</p> <p>(-) Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones y material particulado.</p> <p>(-) Contaminación sonora por el incremento de ruido y vibraciones.</p> <p>(-) Riesgo de contaminación del suelo y napas por derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas utilizadas en la obra, o mal manejo de vertidos.</p> <p>(-) Generación de aguas residuales durante la construcción.</p> <p>(-) Afectación de la flora y fauna local por desbroce y movimiento de suelos.</p> <p>(-) Riesgos de generación de pasivos por mala operación o</p>	<p>Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos:</p> <p>(-) Riesgos ocupacionales para el personal de trabajo, riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas (incluyendo COVID-19), riesgos de accidentes viales y uso de maquinaria.</p> <p>(-) Generación de residuos sólidos domiciliarios y peligrosos.</p> <p>(-) Dispersión de plagas y vectores por movimiento de suelo, limpieza de terreno, etc.</p> <p>(-) Alteración del paisaje y usos del suelo establecidos por la obra (por ejemplo: instalación del obrador)</p> <p>(-) Molestias a los vecinos y dificultad en el tránsito vehicular y peatonal.</p> <p>(-) Interferencias con redes de servicio público ocasionando roturas accidentales y cortes de servicio.</p>

Tipología de obras por Componente	Identificación de impactos	
	Medio Físico y Biológico	Medio Socioeconómico
	mantenimiento de las instalaciones e insumos.	(-) Desplazamiento físico y/o económico temporal y/o permanente de hogares vulnerables, en caso de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo ambiental, riesgo físico u ocupando el derecho de vía de espacios a intervenir por el Programa.
<ul style="list-style-type: none"> Obras estratégicas que permitan la integración del barrio popular con la ciudad formal. 	(+) Consolidación del tejido urbano. (+) Promoción de la planificación urbana integral. (+) Sostenibilidad de las intervenciones. (+) Reducción de la vulnerabilidad frente al Cambio Climático.	(+) Contribución a la integración socio urbana. (+) Apropiación del barrio. (+) Promoción de la participación ciudadana.
	Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos: (-) Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones y material particulado. (-) Contaminación sonora por el incremento de ruido y vibraciones. (-) Riesgo de contaminación del suelo y napas por derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas utilizadas en la obra, o mal manejo de vertidos. (-) Generación de aguas residuales durante la construcción. (-) Afectación de la flora y fauna local por desbroce y movimiento de suelos.	Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos: (-) Riesgos ocupacionales para el personal de trabajo y para la comunidad: riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas (incluyendo COVID-19), riesgos de accidentes viales y uso de maquinaria. (-) Generación de residuos sólidos domiciliarios y peligrosos. (-) Dispersión de plagas y vectores por movimiento de suelo, limpieza de terreno, etc. (-) Alteración del paisaje y usos del suelo establecidos por la obra (por ejemplo: instalación del obrador) (-) Molestias a los vecinos y dificultad en el tránsito vehicular y peatonal. (-) Interferencias con redes de servicio público ocasionando roturas accidentales y cortes de servicio. (-) Desplazamiento físico y/o económico temporal y/o permanente

Tipología de obras por Componente	Identificación de impactos	
	Medio Físico y Biológico	Medio Socioeconómico
		de hogares vulnerables, en caso de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo ambiental, riesgo físico u ocupando el derecho de vía de espacios a intervenir por el Programa.
Componente IV. Desarrollo socioeconómico y comunitario en Barrios Populares con perspectiva de género y diversidad		
<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en valor y ampliación de espacios comunitarios. • Mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica del barrio y/o vinculada al desarrollo económico local y regional 	(+) Promoción de la planificación urbana integral.	(+) Contribución a la integración socio urbana. (+) Contribución a la ejecución de iniciativas orientadas a promover la diversidad de género. (+) Contribución al desarrollo económico. (+) Apropiación de los espacios comunitarios del barrio. (+) Mejora de la infraestructura económica del barrio. (+) Generación de empleo (promoviendo la contratación de la mano de obra local), y en la dinamización de la actividad de comercio de bienes y servicios de la zona. (+) Promoción de la participación ciudadana.
	Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos: (-) Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones y material particulado. (-) Contaminación sonora por el incremento de ruido y vibraciones. (-) Riesgo de contaminación del suelo y napas por derrames accidentales de hidrocarburos, aceites y otras sustancias químicas utilizadas en la obra, o mal manejo de vertidos.	(-) Posible incremento de la vulnerabilidad socio económica en las áreas objeto de intervención. Durante la ejecución de obras civiles, se prevén los siguientes impactos negativos: (-) Riesgos ocupacionales para el personal de trabajo, riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas (incluyendo COVID-19), riesgos de accidentes viales y uso de maquinaria. (-) Generación de residuos sólidos domiciliarios y peligrosos. (-) Dispersión de plagas y vectores por movimiento de suelo,

Tipología de obras por Componente	Identificación de impactos	
	Medio Físico y Biológico	Medio Socioeconómico
	<p>(-) Generación de aguas residuales durante la construcción.</p> <p>(-) Afectación de la flora y fauna local por desbroce y movimiento de suelos.</p>	<p>limpieza de terreno, etc.</p> <p>(-) Alteración del paisaje y usos del suelo establecidos por la obra (por ejemplo: instalación del obrador)</p> <p>(-) Molestias a los vecinos y dificultad en el tránsito vehicular y peatonal.</p> <p>(-) Interferencias con redes de servicio público ocasionando roturas accidentales y cortes de servicio.</p> <p>(-) Posible desplazamiento físico y/o económico temporal y/o permanente, en caso de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo ambiental, riesgo físico u ocupando el derecho de vía de espacios a intervenir por el Programa.</p>

5.4 Riesgos de Desastres

Para los efectos de este Análisis, se define como riesgo a cualquier elemento o situación del ambiente (físico o antrópico) que pueda representar una amenaza para el Programa, y que está causado por fuerzas ajenas a él (no predecibles).

El análisis precedente considera los impactos y riesgos que el Programa podría causar sobre el ambiente, ya sea físico, biológico o socioeconómico.

En cuanto a los riesgos de desastre y cambio climático hacia la ejecución del Programa y su viabilidad, y/o riesgos que la ejecución del Programa aumente la vulnerabilidad de las poblaciones humanas a los riesgos de desastre y cambio climático existentes, el riesgo se ha clasificado como **moderado**.

Esta clasificación se asignó teniendo en cuenta que las áreas donde se prevé el desarrollo de las actividades se localizan en Barrios Populares (BP), donde generalmente las amenazas naturales por desbordamiento fluvial y deslizamiento se clasifican como altas, y la criticidad y vulnerabilidad del componente de infraestructura del proyecto se clasifica como moderado, según los criterios incluidos en la tabla de criticidad de mejoramiento de vivienda.

No se esperan incrementos de las condiciones actuales de amenazas naturales o de la vulnerabilidad de las comunidades locales. Por el contrario, las acciones del Programa se enfocan a la reducción de la vulnerabilidad.

5 Análisis de Brechas

En la **Tabla 24** se presenta el Análisis de Brechas del Programa AR-L1361. El Análisis se realizó en función de las obligaciones derivadas del marco normativo existente a nivel nacional y de los requerimientos establecidos en el Marco de Política Ambiental y Social del BID. Asimismo, se consideró el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) correspondiente al Programa de Integración Socio Urbana (PISU) del Ministerio de Desarrollo Social (MDS). El MGAS define el proceso general a partir del cual se aplican un conjunto de procedimientos y medidas para manejar los eventuales impactos y riesgos que generen proyectos específicos del PISU a ejecutar por el MDS, motivo por el cual se contempló dentro de la evaluación de documentos.

Como parte del análisis, se describe la presencia o no de brechas como **"Existencia de Brechas"** o **"Sin Brechas"**, respectivamente, y se incluye la justificación de la categorización.

Para la realización de este trabajo se hizo un relevamiento exhaustivo de la normativa nacional vigente que se complementa con el análisis de cada una de las disposiciones de los instrumentos jurídicos relevados a los efectos de identificar la equivalencia con los requisitos que plantean el MPAS y las diez Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS), y los instrumentos de gestión existentes en el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del PISU referenciado en el análisis como MGAS – PISU.

Tabla 24 – Análisis de Brechas del Programa AR-L1361

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
Marco de Política Ambiental y Social		
1. Clasificación de Impactos y Riesgos de los Proyectos.	Existencia de Brecha	<p>La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 26.675 en su art. 11, establece que toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. La realización del estudio de impacto ambiental y del procedimiento de evaluación de impacto ambiental implica identificar y clasificar los impactos y riesgos del proyecto.</p> <p>Por su parte el OE, en el MGAS desarrollado en el marco del PISU (MGAS-PISU) cuenta con procedimientos a seguir en las distintas etapas del ciclo de proyectos (preparación, formulación, ejecución y operación).</p> <p>Particularmente, en la Ficha Ambiental y Social (Anexo 1 del MGAS del PISU) se realiza una identificación y valoración preliminar de los potenciales impactos del proyecto a ejecutarse. Sin embargo, será necesario realizar ajustes sobre la misma en función de los requerimientos establecidos en el MPAS. En este sentido, se requiere incluir el tipo de Categoría del Proyecto bajo evaluación (quedando excluidos de financiamiento los proyectos Categoría A), y reemplazar la mención de las Políticas de Salvaguardas por las NDAS.</p>
2. Debida Diligencia ambiental y Social de los Proyectos.	Sin Brecha	<p>La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 26.675 en su art. 11, establece que toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. Asimismo, en su art. 12 la ley dispone que las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente, y el art. 13 establece que los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. Teniendo en cuenta que la debida diligencia ambiental y social queda incluida dentro de las obligaciones y es parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se concluye que no se identifican Brechas.
3. Seguimiento y supervisión de los Proyectos.	Sin Brecha	El seguimiento y la supervisión de proyectos forma parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en el art. 11 la Ley N.º 25.675. En adición, en el MGAS-PISU se establece la realización del seguimiento y control del cumplimiento del PGAS a través del Informe Ambiental y Social de Seguimiento (IASS), que se elabora de manera mensual y acompaña al certificado de obra para su aprobación por parte de la SISU. En los casos que resulten pertinentes, tendrá participación en el control la Autoridad de Aplicación que corresponda. En el anexo 7 del mencionado MGAS se incluye un modelo de IASS, el cual deberá adaptarse a las medidas y Programas del PGAS del Proyecto. Por lo expuesto se concluye que no se identifican brechas.
4. Divulgación de información	Sin Brecha (requiere acción)	La Ley N° 27.275 establece el Régimen de Acceso a la Información Pública estableciendo que toda la información en poder del Estado se presume pública, y que toda la información en poder, custodia o bajo control de los sujetos obligados debe ser accesible para todas las personas. El art. 7 de la ley establece que son sujetos obligados a brindar información pública la administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social; como así también las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional, entre otros. Asimismo, la Ley define en el art. 3 a la información pública como todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien. En adición, durante la preparación de este Programa se dará inicio a un proceso de consulta pública, avanzando con un proceso de socialización del Programa, el resultado de este Análisis y acciones a seguir. Dicho proceso continuará durante la etapa de ejecución.

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		Teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones previstas, se concluye que no se identifican brechas .
5. Conocimiento de los requisitos del MPAS del BID y sus NDAS por parte del OE.	Existencia de Brecha	<p>El equipo del OE ha estado a cargo de la ejecución del Programa AR-L1306 (Programa de Integración Socio Urbana), por lo cual cuenta con experiencia en la implementación de proyectos con el BID bajo las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales, pero no bajo el nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS).</p> <p>En este contexto, con el fin de atender los requerimientos establecidos en el MPAS del BID, se realiza este Análisis con el propósito de identificar brechas y acordar un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) a fin de trabajar sobre las diferencias y vacíos encontrados.</p> <p>Por lo expuesto, se concluye que existen Brechas.</p>
6. Aplicación de las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial en los Proyectos.	Existencia de Brecha	<p>A nivel nacional, no hay normativa que establezca la obligación de aplicación de las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial en los proyectos, por lo que se concluye que existen brechas para este requisito, aunque muchas de las directrices estén contempladas en el marco normativo vigente a nivel nacional.</p> <p>El OE deberá incluir en el MGAS del Programa referencia a las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial como parte de la normativa aplicable al Programa.</p>
7. Lista de exclusión	Sin Brecha	El Programa AR-L1361 no contempla proyectos que dentro de sus actividades incluyan acciones o elementos que se encuentren incluidos dentro de la lista de exclusiones del Anexo I del MPAS del BID. Por lo tanto, se concluye que no existen brechas para este requisito .
NDAS 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales		
1. Gestionar de manera adecuada las quejas de las comunidades, personas afectadas y otras partes interesadas.	Sin Brecha	La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 25.675, establece que la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>También, la normativa garantiza que toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. Las autoridades deben institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. No obstante, como se mencionó, la normativa nacional no prevé obligaciones relativas a la gestión de las quejas y reclamos de comunidades, personas afectadas y partes interesadas por parte del proyecto, sino que garantiza el derecho de las personas a acceder a la información pública ambiental o bien a la justicia (pudiendo interponer una acción de amparo).</p> <p>Por otra parte, en el MGAS del PISU se establece que los proyectos deberán contar con un Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC). En este sentido, considerando que el OE cuenta con el instrumento desarrollado y con experiencia en la implementación del mismo, se concluye que no existen brechas.</p>
<p>2. Determinar y evaluar los riesgos y los impactos ambientales y sociales de los proyectos a financiarse en el marco del programa.</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 26.675, establece en su art. 11 que toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. El art. 12 dispone que las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.</p> <p>Por su parte el OE, en el MGAS-PISU realiza una identificación preliminar de impactos ambientales y sociales esperados. También incluye una Ficha Ambiental y Social y un mapa de riesgos ambientales a fin de identificar tempranamente las</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>complejidades de los proyectos, criticidades, condicionantes, requisitos y restricciones. Del análisis de dicha información se desprende que será necesario incluir la identificación y análisis de impactos acumulativos, tal lo establecido en esta Norma.</p> <p>Por lo expuesto, se considera que existen brechas para cumplir con este requisito.</p>
<p>3. Planes de manejo para gestionar los riesgos e impactos identificados durante la ejecución del Programa.</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 25.675, establece en su art. 13 que los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.</p> <p>En adición, en el MGAS-PISU se contemplan lineamientos para la elaboración de Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS). El PGAS es la herramienta metodológica que tiene como objetivo asegurar la utilización de buenas prácticas ambientales y sociales, garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en esas áreas, y corregir cualquier desviación que implique riesgos o impactos socioambientales. De la revisión del documento surge que los Programas del PGAS se desarrollan de manera general, siendo necesario mayor desarrollo de los mismos y siguiendo una misma estructura. Por ejemplo: Objetivo del Programa, Impactos a evitar, medidas de mitigación propuestas, indicadores de medición, responsables.</p> <p>En cuanto a los programas que se incluyen, en materia de higiene y seguridad, el mismo está orientado a los trabajadores, siendo necesario también incluir medidas en materia de salud y seguridad comunitaria. En cuanto al Programa de Manejo de flora, fauna y plagas, se sugiere desarrollar el programa de control de plagas como otro programa distinto al de manejo de flora y fauna.</p> <p>Por lo expuesto, se identifican brechas para el cumplimiento de este requerimiento.</p>
<p>4. Definir una estructura organizativa que defina las funciones, responsabilidades y</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>A nivel nacional y provincial, se cuenta con un sistema normativo y distintos instrumentos legales. Por otra parte, en el MGAS-PISU, se definen de manera general procedimientos y lineamientos, pero no se desarrolla la estructura</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
facultades para la aplicación del SGAS.		organizativa del Programa, ni los demás elementos contenidos en el SGAS establecido en esta Norma. Por lo tanto, se concluye que existen brechas para cumplir con este requerimiento El OE deberá documentar el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) a nivel de Programa, tal lo establecido en la presente Norma.
5. Preparar y mantener implementado un sistema de preparación y respuesta antes situaciones de emergencias.	Existencia de Brecha	A nivel nacional se creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) por la Ley N.º 27.287, que tiene como objetivo integrar acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación. Su finalidad es la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos. Asimismo, como ya fue mencionado, hay normativa nacional que establece que los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. En Adición, dentro de los lineamientos del PGAS establecidos en el MGAS del PISU se incluye el desarrollo e implementación de un Programa de Contingencias. Sin embargo, se requiere mayor desarrollo de cada procedimiento que hace referencia, e incluir la elaboración de un protocolo de actuación en caso de corte de servicios. Por lo expuesto se concluye que existen brechas .
6. Procedimientos para hacer el seguimiento del programa de gestión y medir su eficacia.	Existencia de Brecha	En el MGAS desarrollado en el marco del PISU se establece la realización del seguimiento y control del cumplimiento del PGAS a través del Informe Ambiental y Social de Seguimiento (IASS). En el anexo 7 del mencionado MGAS se incluye un modelo de IASS, el cual contiene un Planilla de Verificación del Cumplimiento de las Condiciones Ambientales y Sociales. En este sentido, será necesario realizar los ajustes que se indicaron en relación al PGAS. Por lo expuesto, se concluye que existen brechas para este requisito.

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
7. Contar con un plan de participación de las partes interesadas acorde con los riesgos e impactos de los Proyectos y su etapa de desarrollo.	Existencia de Brecha	<p>El Acuerdo Escazú, aprobado por Ley N.º 27.566, que tiene jerarquía suprallegal, establece que la autoridad pública realizará esfuerzos por identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente, y promoverá acciones específicas para facilitar su participación. Asimismo, contar con un plan de participación de las partes interesadas acorde con los riesgos e impactos de los proyectos es parte del procedimiento de impacto ambiental previsto en la Ley N.º 25.675.</p> <p>En cuanto a los instrumentos desarrollados por el OE, si bien en el MGAS – PISU se incluyen lineamientos para la realización de Consulta Pública, y que uno de los programas del PGAS es sobre Comunicación, Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos, será necesario desarrollar un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), tal como lo establece la NDAS 10. Por lo tanto, se identifican brechas para el cumplimiento de este requerimiento.</p>
8. Mantener comunicaciones externas efectivas con las partes interesadas	Sin Brecha	<p>La normativa nacional, en la Ley N.º 25.675, consagra en su art. 19, el derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular y de alcance general. Sin embargo, la normativa no contempla la obligación de mantener una comunicación efectiva con las partes interesadas.</p> <p>En adición, en el MGAS del PISU se establece que los Proyectos deberán contar con un Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC), y dentro de los lineamientos del PGAS se incluye un Programa de Comunicación, Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos.</p> <p>Considerando que el OE cuenta con el instrumento desarrollado y con experiencia en la implementación del mismo, se concluye que no existen brechas. De todas formas, deberá desarrollarse el PPPI, como se mencionó en el punto anterior.</p>
9. Presentar informes al menos anuales a las personas afectadas y otras partes interesadas.	Existencia de Brecha	<p>La Ley N° 25.831 establece el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, garantizando el derecho de acceso a dicha información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Sin</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>embargo, la normativa no contempla la obligación de brindar información pertinente y presentar informes a las personas afectadas y las partes interesadas. En cuanto a los instrumentos del OE, en el Anexo 5 del MGAS del PISU se incluye un Marco de Reasentamiento donde se establecen lineamientos para el desarrollo e implementación de Planes de Reasentamiento (físico y/o económico). En cuanto a Seguimiento y Monitoreo, indica que la Secretaría de Integración Socio Urbana y los organismos provinciales con responsabilidad en la ejecución del reasentamiento, tendrán a su cargo el seguimiento de las acciones del Plan, cuyo fin es verificar que las actividades sean efectivas. Para ello seleccionará un conjunto de actividades a monitorear en función del cronograma del Plan. Por otro lado, con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos del Plan en términos de que todos los afectados se encuentren en igual o mejor condición que antes del proyecto, se tomará como base para el seguimiento los datos recopilados durante el Censo Barrial de Reasentamiento. Pero no menciona la elaboración de un Informe de seguimiento.</p> <p>Por lo expuesto, se considera que existen brechas para el cumplimiento de este requisito.</p> <p>El OE deberá incluir dentro del MGAS lineamientos para la presentación de informes periódicos a las personas afectadas por el proyecto (sea en materia de reasentamiento o no) y a otras partes interesadas pertinentes en los que describirá los avances en la ejecución del proyecto, planes de acción con respecto a cuestiones que conlleven riesgos o impactos activos para las personas afectadas y acerca de las cuestiones que se hayan planteado en el proceso de consulta o el mecanismo de reclamación como inquietudes de esas comunidades. La frecuencia de los informes será proporcional a las preocupaciones de las personas afectadas por el proyecto, pero su periodicidad deberá ser, como mínimo, anual.</p>
10. Establecer y mantener un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)	Existencia de Brecha	<p>A nivel nacional y provincial, se cuenta con un sistema normativo y distintos instrumentos legales.</p> <p>Además, en el MGAS del PISU, se definen de manera general procedimientos y lineamientos, pero no se encuentran los elementos del SGAS tal como lo</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		establecido en esta Norma. Por lo tanto, se concluye que existen brechas para cumplir con este requerimiento de la Norma. Será necesario que el OE documente el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) a nivel de Programa, estructurado y contemplando los siete elementos del SGAS: (i) marco ambiental y social específico según el proyecto, (ii) identificación de riesgos e impactos, (iii) programas de gestión, (iv) capacidad y competencia organizativas, (v) preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, (vi) participación de las partes interesadas y (vii) seguimiento y evaluación.
11. Contar con un mecanismo de reclamación por parte del OE para los Proyectos.	Sin Brecha (requiere acción)	En el MGAS del PISU se establece que los Proyectos deberán contar con un Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos (MARRC), y dentro de los lineamientos del PGAS se incluye un Programa de Comunicación, Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos. En este sentido, considerando que el OE cuenta con el instrumento desarrollado y con experiencia en la implementación del mismo, se concluye que no existen brechas . De la revisión de la planilla del Sistema de Atención de Quejas y Reclamos se identifica como mejora incluir una columna con la denominación "Obra-Programa/Otro" o similar, a fin de identificar fácilmente, y sistematizar, las quejas y reclamos por intervención, y aquellas que no corresponden con la ejecución del programa y requieran otro canal de tratamiento.
NDAS 2: Trabajo y Condiciones Laborales		
1. Adoptar y aplicar políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño de los Proyectos y su fuerza laboral.	Existencia de Brecha	La Ley N.º 19.587 y sus modificatorias, establece que las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán a sus disposiciones y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. Esta Ley se aplica a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten. El Decreto N.º 1338/96 dispone obligaciones relativas a los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Servicios de Medicina del Trabajo según las características del establecimiento, y las tareas de los trabajadores, desarrollando el concepto de "trabajador equivalente". Por lo tanto, en materia normativa adoptar y aplicar políticas y

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño de los Proyectos y su fuerza laboral es una obligación legal.</p> <p>En cuanto al requerimiento específico de esta Norma de desarrollar un Procedimiento de Gestión Laboral (PGL), dado que corresponde a un requisito exclusivo del MPAS, no se encuentra contemplado dentro del MGAS del PISU. El PGL aplica a trabajadores de los Proyectos contratados directamente por el Organismo Ejecutor (trabajadores directos), al personal contratado a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del Programa durante un tiempo considerable (trabajadores contratados) y a los contratados por los proveedores principales de los organismos ejecutores (trabajadores de la cadena de suministro principal). Quedan exceptuados empleados públicos sujetos a los términos y condiciones de su convenio o arreglo laboral vigente en el ámbito del sector público.</p> <p>A partir de lo expuesto, se considera que existen brechas para este requerimiento de la NDAS 2. El OE deberá elaborar un PGL para ser implementado durante la ejecución del Programa.</p>
<p>2. Proporcionar a los trabajadores información documentada, clara y comprensible, sobre sus derechos de acuerdo con la legislación nacional en el ámbito laboral y de empleo y cualquier convenio colectivo aplicable, incluidos sus derechos con respecto a horas de trabajo, salario, horas extra, remuneración, jubilación y otras prestaciones, desde el comienzo de la relación laboral</p>	<p>Sin Brecha (requiere acción)</p>	<p>La Ley N.º 20.744, en el art. 79 y en cuanto al deber de diligencia, establece que el empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de las normas, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. Asimismo, las partes están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. También, el empleador está obligado de acuerdo al art. 55, a llevar un libro especial, registrado y rubricado, en el que se consignará: a) Individualización íntegra y actualizada del empleador; b) Nombre del trabajador; c) Estado civil; d) Fecha de ingreso y egreso; e) Remuneraciones asignadas y percibidas; f) Individualización de personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares; g) Demás datos que permitan una exacta</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
y cuando se produzca cualquier cambio sustancial.		<p>evaluación de las obligaciones a su cargo. Por último, en el art. 138 la ley establece que todo pago en concepto de salario u otra forma de remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el trabajador, en doble ejemplar y con el contenido establecido en el art. 140 de la Ley.</p> <p>En lo que respecta a los instrumentos del OE, se asume que éstos parten del cumplimiento de la legislación nacional, y se solicita verificar la inclusión de una cláusula en los contratos con las empresas contratistas que indique lo expuesto en este requerimiento.</p>
3. Respetar y asegurar términos de empleo para los convenios de negociación colectivas con las organizaciones laborales (sindicatos).	Sin Brecha (requiere acción)	<p>La normativa nacional, establece que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige: a) Por la ley N.º 20.744; b) Por las leyes y estatutos profesionales; c) Por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales; d) Por la voluntad de las partes; e) Por los usos y costumbres. En ese sentido, el art. 21 de la ley, establece que el contrato de trabajo y sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Por lo tanto, respetar y asegurar los términos de empleo para los convenios de negociación colectivos con las organizaciones laborales es una obligación legal.</p> <p>Ídem al punto anterior, dado que no se pudo constatar este requerimiento, se asume el cumplimiento de la legislación nacional por parte del OE, y se solicita verificar la inclusión de una cláusula en los contratos con las empresas contratistas que indique lo expuesto en este requerimiento.</p>
4. Asegurar términos de empleos y condiciones laborales sustancialmente equivalentes a los de los trabajadores no migrantes que realizan labores similares.	Sin Brecha (requiere acción)	<p>La Ley N.º 20.744, establece en su art. 17, la prohibición de hacer discriminaciones. La ley prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad.</p> <p>Asimismo, en el MGAS del PISU, dentro del PGAS, se incluye el Programa de Gestión de Trabajadores. En el mismo se indica: Todos los trabajadores deberán ser contratados bajo las normas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Deberá elaborarse un Código de Conducta destinado a</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>preservar tanto la salud y las condiciones de higiene del trabajador, como las condiciones socio ambientales y sanitarias en el obrador y en el entorno.”</p> <p>Ídem al punto anterior, dado que no se pudo constatar este requerimiento, se asume el cumplimiento de la legislación nacional por parte del OE, y se solicita verificar la inclusión de una cláusula en los contratos con las empresas contratistas que indique lo expuesto en este requerimiento.</p>
<p>5. Establecer políticas y procedimientos sobre la calidad y gestión de alojamientos y la provisión de servicios básicos cuando los Proyectos requieren alojamiento de trabajadores.</p>	<p>Sin Brecha</p>	<p>La Ley N.º 20.744, en su art. 77 relativo al deber de protección, alimentación y vivienda, establece que el empleador debe prestar protección a la vida y bienes del trabajador cuando este habite en el establecimiento. Si se le proveyese de alimentación y vivienda, aquélla deberá ser sana y suficiente, y la última, adecuada a las necesidades del trabajador y su familia. Debe efectuar a su costa las reparaciones y refecciones indispensables, conforme a las exigencias del medio y confort. Por lo tanto, establecer políticas y procedimientos sobre la calidad y gestión de alojamientos y la provisión de servicios básicos cuando los Proyectos requieren alojamiento de trabajadores está regulado por la normativa nacional.</p> <p>De todas formas, por el alcance y la magnitud de las intervenciones a financiarse en el marco del Programa, no se espera la necesidad de gestionar alojamientos de trabajadores. En este sentido se valora sin brechas.</p>
<p>6. Establecer y mantener políticas y procedimientos sobre la No discriminación e igualdad de oportunidades.</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>La Ley N.º 20.744, en su art. 81, dispone que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del trabajador.</p> <p>En cuanto al MGAS del PISU, dentro del PGAS, se incluye el Programa de Gestión de Trabajadores. En el mismo se indica que deberá elaborarse un Código de Conducta siendo uno de los puntos: “Se prohíbe explícitamente cualquier conducta de acoso sexual u hostigamiento contra las mujeres, niños y niñas de la comunidad, así como contra trabajadoras de la empresa”. Será necesario incluir</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		más aspectos relacionados sobre la no discriminación, e incluir su abordaje en el Programa de Capacitación.
7. Establecer e implementar políticas y procedimientos para la contratación de niños que aún no hayan cumplido la edad mínima de empleo o contratación	Sin Brechas	<p>La Ley N.º 20.744 y sus modificatorias, en su art. 32 relativo a la capacidad, dispone como regla general que las personas desde los dieciocho (18) años, pueden celebrar contrato de trabajo, y como excepción, que las personas desde los dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, pueden celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o tutores, presumiéndose tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. El empleador, al contratar trabajadores de uno u otro sexo, menores de dieciocho (18) años, deberá exigir de los mismos o de sus representantes legales, un certificado médico que acredite su actitud para el trabajo, y someterlos a los reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones respectivas. El art 190 establece que no podrá ocuparse a personas de dieciséis (16) a dieciocho (18) años en ningún tipo de tareas durante más de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales. Asimismo, el art. 189 establece que queda prohibido a los empleadores ocupar personas menores de dieciséis (16) años en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro. Por último, también es pertinente señalar que el art. 148 bis del Código Penal establece prisión de 1 a 4 años a quien se aprovechara económicamente del trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.</p> <p>La contratación de empleadas y empleados deberá seguir lo establecido por la legislación nacional, por lo tanto, se considera que no se identifican brechas.</p>
8. Políticas y procedimientos para evitar el trabajo forzoso.	Sin Brechas	<p>La República Argentina es uno de los 59 países que ratificaron el Protocolo de 2014 relativo al Convenio 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso. Asimismo, la Ley N.º 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. En su art. 4, establece que existe explotación cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzado, por lo que existe normativa supralegal y nacional que prohíbe el trabajo forzoso.</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		La contratación de empleadas y empleados deberá seguir lo establecido por la legislación nacional, por lo tanto, se considera que no se identifican brechas .
9. Establecer e implementar políticas y procedimientos para la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores (programas de SST del prestatario para los Proyectos).	Sin Brechas	<p>A nivel nacional, la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se rige por la Ley N° 24.557 y normativa reglamentaria, y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se deben ajustar, en todo el territorio de la República Argentina, a las normas de la Ley N.º 19.587 y su reglamentación. La higiene y seguridad en el trabajo comprende las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicológica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.</p> <p>En cuanto al MGAS del PISU, dentro del PGAS, se incluye el Programa de Seguridad, Salud e Higiene Laboral.</p> <p>Teniendo en cuenta todo ello, y que establecer e implementar políticas y procedimientos para la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores es una de las obligaciones que surge de la normativa nacional, se concluye que no se identifican brechas para el cumplimiento de este requerimiento.</p>
10. Establecer y mantener políticas y procedimientos para la gestión y seguimiento del desempeño de trabajadores contratados por terceros empleadores que brindan servicios para los Proyectos.	Sin Brecha	<p>El art. 29 de la Ley N.º 20.744 establece que los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Teniendo en cuenta ello, los derechos y obligaciones establecidos por la normativa nacional son exigibles y aplicables también a los trabajadores contratados por terceros empleadores que brindan servicios para los proyectos.</p> <p>Considerando que se trata de una de las obligaciones que surge de la normativa nacional, se concluye que no se identifican brechas para el cumplimiento de este requerimiento.</p>
11. Establecer e implementar políticas y procedimientos para los	Sin Brecha	La Ley N.º 20.744, en su art. 29, establece que los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto,

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
trabajadores de la cadena de suministro principal, si existe un riesgo de trabajo forzoso, menores, SST, etc.		y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Ídem al punto anterior, considerando que se trata de una de las obligaciones que surge de la normativa nacional, se concluye que no se identifican brechas para el cumplimiento de este requerimiento.
12. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales, incluidos trabajadores migrantes.	Existencia de Brecha	La Ley N.º 24.557 sobre prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo, tiene por objetivos reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; y promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. Esta normativa y su reglamentación establece obligaciones específicas respecto a la evaluación y gestión de los riesgos e impactos relacionado con el trabajo y las condiciones laborales. En cuanto al Programa, deberá incluirse mención sobre la evaluación y gestión de riesgos e impactos, incluyendo trabajadores migrantes.
13. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos ocupacionales, de salud y seguridad	Sin Brecha	La Ley N.º 24.557 sobre prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo, tiene por objetivos reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado; promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; y promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras. Esta normativa establece obligaciones específicas respecto a la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ocupacionales de salud y seguridad. Asimismo, en el MGAS del PISU, dentro del PGAS, se incluyen los Programas de Seguridad, Salud e Higiene Laboral, Contingencias, Gestión de Trabajadores y

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		Seguimiento y Monitoreo. Teniendo en cuenta lo expuesto, no se identifican brechas.
14. Evaluar los riesgos e impactos relacionados con los trabajadores de la cadena de suministro primaria.	Existencia de Brecha	La Ley N.º 20.744, en su art. 29, establece que los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Teniendo en cuenta ello, las obligaciones relativas a evaluar los riesgos e impactos establecidas en la normativa nacional se extienden a los trabajadores de la cadena de suministro primaria. En cuanto al Programa, deberá incluirse mención sobre la evaluación de riesgos e impactos relacionados con los trabajadores de la cadena de suministro primaria.
15. Elaboración y aplicación de un Mecanismo de Reclamos para los trabajadores	Existencia de Brecha	El OE no cuenta con un Mecanismo de Quejas y Reclamos específico para trabajadores, con lo cual se concluye que hay brechas. Para cumplimentar con este requerimiento, se deberá elaborar un procedimiento o mecanismo para atender quejas, reclamos y consultas destinado únicamente a trabajadores.
NDAS 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación		
1. Incluir en el diseño del Proyecto técnicas para la eficiencia en el uso de recursos y de prevención y control de la contaminación (para mejorar su eficiencia en el consumo de energía, agua y otros recursos e insumos importantes).	Sin Brecha	Si bien no existe normativa a nivel nacional que establezca la obligación de incluir en el diseño del proyecto técnicas para la eficiencia en el uso de recursos, en materia de eficiencia en el uso de los recursos y prevención y control de la contaminación encontramos el Decreto N.º 140/07, que declara de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía y también aprueba los lineamientos del PROGRAMA NACIONAL DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA (PRONUREE), destinado a contribuir y mejorar la eficiencia energética de los distintos sectores consumidores de energía, estableciendo una lista indicativa de acciones que deberán tenerse en cuenta para la construcción de viviendas nuevas y viviendas en uso. También, la Ley N.º 25.675 establece como uno de los objetivos de la política ambiental el de promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>y establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.</p> <p>En adición, dentro del Componente II del Programa AR-L1361, en línea con el PISU, se incluyen tipologías de obras de mejoramiento de vivienda considerando criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica; formulación de proyectos ejecutivos incluyendo cambio climático y sostenibilidad ambiental; obras para la generación de SH que incluyan criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica; servicios para la incorporación de criterios de diseño para viviendas incluyendo criterios de vivienda verde y resiliente. Dentro del Componente III se incluye el financiamiento de equipamiento urbano inteligente, equipamiento comunitario que incorpore criterios de edificios verdes y las obras complementarias y de mitigación y adaptación al cambio climático requeridas.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que no hay brechas.</p>
<p>2. Adoptar medidas para evitar o reducir el consumo de agua, a fin de que el consumo generado por el Proyecto no tenga impactos adversos importantes sobre las personas y la biodiversidad.</p>	<p>Sin Brecha (requiere acción)</p>	<p>A nivel nacional, la Ley N.º 25.688 establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Allí se establece que para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen.</p> <p>Por otra parte, en el MGAS del PISU, uno de los programas del PGAS es sobre Gestión del Uso del Agua y Manejo de Efluentes Líquidos. También se encuentra otro Programa sobre Capacitación, donde se incluyen diversos temas en función del alcance del proyecto. En este sentido, se sugiere incluir dentro de este Programa, capacitación a trabajadores sobre la adopción de medidas para evitar o reducir el consumo de agua durante la ejecución de los trabajos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que no hay brechas.</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
3. Emplear principios y técnicas de eficiencia de recursos y prevención de la contaminación consistentes con las guías buenas prácticas industriales internacionales (GIIP)	Existencia de Brechas	<p>A nivel nacional, no existe normativa que reconozca y/o mencione los principios y técnicas de eficiencia de recursos y prevención de la contaminación consistentes con las guías buenas prácticas industriales internacionales (GIIP).</p> <p>Por otra parte, considerando que el OE dentro del MGAS-PISU no incluye referencia a las mencionadas guías, se concluye que hay brechas para el cumplimiento de este requisito. El OE deberá incluir en el MGAS mención a los principios y técnicas de eficiencia de recursos y prevención de la contaminación consistentes con las guías buenas prácticas industriales internacionales (GIIP).</p>
4. Evitar o minimizar las emisiones de GEI relacionadas con el Proyecto durante el diseño y la operación.	Sin Brecha	<p>En primer lugar, la República Argentina ha ratificado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, aprobando sus textos mediante las Leyes N.º 24.295 y 27.270.</p> <p>En segundo lugar, la Ley N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global tiene por objetivos los de establecer las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas; asistir y promover el desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país; reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios. Sin embargo, a pesar de todo el desarrollo normativo, no existe la obligación legal de evitar o minimizar las emisiones de GEI relacionadas con el proyecto durante el diseño y la operación.</p> <p>En adición, en línea con el PISU, el Programa AR-L1361 incluye criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica. Particularmente, dentro del Componente III, se incluye el financiamiento de equipamiento urbano inteligente, equipamiento comunitario que incorpore criterios de edificios verdes y obras complementarias y de mitigación y adaptación al cambio climático</p> <p>Por lo expuesto, se concluye que no existen brechas.</p>
5. Establecer medidas para prevenir la contaminación del medioambiente, incluido la	Sin Brecha	<p>La Constitución Nacional, en su art 41 consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y también establece el deber jurídico de preservarlo. En el segundo párrafo establece que las autoridades deberán</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
prevención en zonas de importancia para la biodiversidad, posibles impactos acumulativos y trasfronterizos.		<p>proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental. Por ello, es importante tener en cuenta que cuando la norma refiere a la obligación de proveer a la protección de este derecho, se apunta no solo a una obligación de omisión de no dañarlo, sino también a prestaciones positivas para poder preservarlo. Asimismo, la Ley N.º 25.675 establece dentro de uno de los objetivos de la política ambiental la de prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo.</p> <p>Asimismo, en el MGAS del PISU, dentro del PGAS se incluyen programas con medidas orientadas a prevenir la contaminación del medio.</p> <p>Teniendo en cuenta todo ello, y que el establecimiento de medidas para prevenir la contaminación del ambiente está previsto en la normativa, se concluye que no hay brechas.</p>
6. Gestionar de manera adecuada los desechos peligrosos y no peligrosos, líquidos y sólidos relacionados con el Proyecto.	Sin Brecha	<p>La República Argentina ha ratificado el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, aprobando su texto mediante la Ley N.º 23.922.</p> <p>Asimismo, la Ley N.º 24.051 sobre residuos peligrosos, establece que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la normativa nacional y provincial, según corresponda. La normativa y su reglamentación establece obligaciones para los generadores, transportistas y operadores de residuos peligrosos. En cuanto a la gestión de residuos domiciliarios, la Ley N.º 25.916 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, estableciendo las etapas de la gestión integral. Asimismo, en el MGAS del PISU, dentro del PGAS se incluye un Programa de Manejo de Residuos Comunes, Peligrosos y de Obra. Teniendo en cuenta lo expuesto, no se identifican brechas.</p>
7. Gestionar el control de plagas adecuadamente. No	Existencia de Brecha	La República Argentina ha ratificado el Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
utilizar plaguicidas prohibido por la OMS.		<p>químicos peligrosos objeto de comercio internacional, aprobando su texto mediante la Ley N.º 25.278. Asimismo, y en cuanto a la gestión del control de plagas, la Ley N.º 11.843 establece que todos los propietarios u ocupantes de propiedades urbanas o rurales y las autoridades en los edificios públicos de todo el territorio de la República Argentina están obligados a la matanza de ratas y otros roedores reservorios de peste, como asimismo a la adopción de las medidas que aconseje la autoridad sanitaria nacional para evitar el desarrollo y propagación de los mismos. La Ley N.º 19.587 y su reglamentación establece que todo empleador debe realizar desinsectaciones y desinfecciones, que deberán ser acreditadas por un medio fehaciente (certificado). Esta obligación, aplica a todo lugar que posea personal en relación de dependencia, sea tanto edificio de consorcio, como comercio, industria, oficina, escuelas, etc. Por último, la Resolución N° 801/15 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre el Sistema Global Armonizado establece que es obligatoria la presentación de Hoja de Seguridad para todo producto químico.</p> <p>Por otra parte, en el MGAS del PISU, dentro del PGAS se incluye un Programa de Manejo de Flora, Fauna y Control de Plagas. Como se ha mencionado anteriormente, se considera pertinente elaborar el Programa de Control de Plagas aparte del Programa de Manejo de Flora y Fauna, y verificar que contenga los ítems que refiere la Norma.</p> <p>Dicho esto, se considera que existen brechas.</p>
NDAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad		
1. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos de salud y seguridad de la comunidad, incluido los impactos desproporcionados sobre las personas vulnerables y establecer medidas de gestión coherentes con las buenas	Existencia de Brechas	<p>La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 26.675, establece en su art. 11 que toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución. Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y,</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
prácticas industriales internacionales.		<p>en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados. Además, la normativa establece en el art. 13 que los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.</p> <p>Por otra parte, en el MGAS del PISU, dentro del PGAS se incluyen diversos Programas orientados a gestionar los riesgos e impactos a fin de garantizar la seguridad de la comunidad. De todas formas, a fin de dar cumplimiento a esta Norma, será necesario desarrollar un Programa sobre salud y seguridad comunitaria, o bien incluir medidas dentro del programa de salud, higiene y seguridad laboral actual, de manera de abordar la gestión de los riesgos a nivel ocupacional y comunitario. Asimismo, deberán incluirse aspectos de la norma que no están mencionados en el actual programa de salud, higiene y seguridad laboral. Por lo tanto, se considera que existen brechas.</p>
2. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos asociados con el diseño y la seguridad de la infraestructura y el equipo.	Sin Brecha	<p>La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 19.587 y su reglamentación, establece que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas; a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje; a mantener en buen estado de conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo. También los empleadores deben promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas. Por ello, y en atención a que la evaluación y gestión de los riesgos e impactos asociados con el diseño y la seguridad de la infraestructura y</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		el equipo está incluido en estas obligaciones, se concluye que no se identifican brechas.
3. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos asociados con la gestión y seguridad de materiales peligrosos.	Sin Brecha	<p>La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 19.587 y reglamentación, establece que constituyen obligaciones de los empleadores depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas; colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en las maquinarias e instalaciones; promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas.</p> <p>Por su parte el OE, dentro del PGAS (MGAS del PISU) cuenta con un Programa de Manejo de Residuos Comunes, Peligrosos y de Obra, y dentro del Programa de Capacitación también se incluye este aspecto.</p> <p>Teniendo en cuenta lo mencionado, se concluye para este requisito que no existen brechas.</p>
4. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos asociados a la exposición de la comunidad a enfermedades.	Existencia de Brecha	<p>De acuerdo con la Ley N.º 25.675 y su art. 13, los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.</p> <p>En adición, dentro del PGAS (MGAS del PISU) el OE cuenta con un Programa de Capacitación en el cual se incluyen los siguientes aspectos: Información sobre seguridad e higiene laboral, riesgos del trabajo, medicina del trabajo; Información detallada sobre enfermedades emergentes (COVID19, dengue, H1N1, ofidismo, SIDA, responsabilidad en las actividades sexuales, etc.), medidas de tratamiento y prevención y primeros auxilios. En caso de identificarse otros riesgos e impactos asociados a la exposición de la comunidad a enfermedades, se deberán incorporar medidas dentro del PGAS.</p> <p>Considerando el contexto en relación con el COVID-19 (SARS-CoV-2), se recomienda incluir un programa en el PGAS con medidas para actuar en caso de exposición de la comunidad a enfermedades infectocontagiosas.</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
<p>5. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos asociados con la preparación y respuesta de emergencia adecuadas de la operación.</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>La normativa nacional, específicamente la Ley N.º 19.587 y su reglamentación relativa a las condiciones de seguridad en el trabajo, establece que se deberán considerar primordialmente la prevención y protección contra incendios y cualquier clase de siniestros.</p> <p>Por parte del OE, si bien dentro de los lineamientos del PGAS (MGAS del PISU) se encuentra el Programa de Contingencias, el mismo menciona en líneas generales los procedimientos que deberán desarrollarse en caso de que ocurra alguna emergencia durante la ejecución de la obra. Será necesario presentar mayor desarrollo de cada uno, e incluir referencia a la elaboración de un protocolo de actuación en caso de corte de servicios.</p>
<p>6. Resiliencia a los peligros naturales y al cambio climático.</p>	<p>Sin Brecha</p>	<p>El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), creado por Ley N.º 27.287, tiene como objetivo integrar acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación. Su finalidad es la protección integral de las personas, las comunidades y el ambiente ante la existencia de riesgos. Asimismo, como ya fue mencionado, hay normativa nacional que establece que los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. Por lo tanto, y atento a que, si bien existe un marco normativo relativo a la gestión del riesgo, no hay obligaciones específicas relativas a ser resiliente a los peligros naturales y al cambio climático. En adición, dentro del Componente II del Programa AR-L1361, en línea con el PISU, se incluyen tipologías de obras de mejoramiento de vivienda considerando criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica; formulación de proyectos ejecutivos incluyendo cambio climático y sostenibilidad ambiental; obras para la generación de SH que incluyan criterios de resiliencia, eficiencia energética e hídrica; servicios para la incorporación de criterios de diseño para viviendas incluyendo criterios de vivienda verde y resiliente. Dentro del Componente III se</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>incluye el financiamiento de equipamiento urbano inteligente, equipamiento comunitario que incorpore criterios de edificios verdes y las obras complementarias y de mitigación y adaptación al cambio climático requeridas. De todas formas, como fuera indicado en el capítulo anterior, no se esperan incrementos de las condiciones actuales de amenazas naturales o de la vulnerabilidad de las comunidades locales. Por el contrario, las acciones del Programa se enfocan a la reducción de la vulnerabilidad.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que no se identifican brechas.</p>
<p>7. Requisito de que el prestatario evalúe y gestione los riesgos hacia la comunidad asociados al uso de personal de seguridad.</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>El Decreto N.º 1002/99 contiene la reglamentación sobre la prestación de servicios de seguridad, investigaciones, vigilancia y custodia sobre personas y/o bienes en el ámbito nacional, respetando las jurisdicciones locales en lo que resulta de su específica competencia. La normativa nacional establece la obligación de tramitar y obtener una habilitación para prestar servicios privados de seguridad y custodia. No obstante, ello, no hay obligaciones expresas relativas a evaluar y gestionar los riesgos hacia la comunidad asociados al uso de personal de seguridad.</p> <p>En caso de existir riesgo de conflicto entre la ejecución del Programa y la comunidad, se deberá contratar personal de seguridad. En este caso, el OE deberá adoptar un código de conducta para suplidores de seguridad alineado con los principios de proporcionalidad y buenas prácticas internacionales en materia de contratación, normas de conducta, capacitación, equipamiento y supervisión de dichos trabajadores. El mecanismo de gestión de quejas específico para trabajadores indicado anteriormente en cumplimiento con la NDAS 2 deberá ser extensivo para todo el personal contratado.</p>
NDAS 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario		
<p>1. Considerar diseños alternativos viables del Proyecto para evitar o minimizar el desplazamiento físico o económico, sopesando los costos y beneficios</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>El ordenamiento jurídico argentino reconoce, consagra y garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada en la Constitución Nacional. En consecuencia, cuenta con un marco normativo que establece el procedimiento expropiatorio a través del cual los Estados o sujetos expropiantes pueden privar y quitar la propiedad a los particulares, en el interés superior de la utilidad pública y el bien común, de manera tal que no lesione las garantías constitucionales</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
ambientales, sociales y financieros, con especial atención a los impactos sobre grupos pobres y vulnerables.		<p>antedichas. La Ley N.º 21.499 dispone el régimen de expropiaciones, estableciendo que pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la "utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no. Establece que la utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual. En ese sentido, la consideración de diseños alternativos viables para evitar o minimizar el desplazamiento físico o económico, sopesando los costos y beneficios ambientales, sociales y financieros forma parte de la definición de utilidad pública de un bien, aunque nuestro país no cuenta con una normativa que regule específicamente brindar un servicio de asistencia y asesoramiento para la relocalización, reasentamiento, readquisición de inmuebles y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que -como consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructura- deban ser desalojados de su lugar de residencia habitual o lugar de comercio.</p> <p>Por su parte el OE, en el marco del PISU, cuenta con un Marco de Reasentamiento elaborado según los lineamientos establecidos en la Política de Reasentamiento Involuntario (OP- 710) del BID, con procedimientos a utilizar en caso de que las actividades del Programa generen reasentamientos involuntarios en la población. Teniendo en cuenta ello, se identifican brechas, debiendo actualizarte el instrumento de Marco de Reasentamiento del Programa AR-L1304 a los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.</p>
2. No desplazar a personas a áreas con brotes activos de enfermedades o áreas propensas a desastres.	Sin Brecha (requiere acción)	<p>Nuestro país no cuenta con una normativa que regule específicamente brindar un servicio de asistencia y asesoramiento para la relocalización, reasentamiento, readquisición de inmuebles y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que -como consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructura- deban ser desalojados de su lugar de residencia habitual o lugar de comercio. No obstante, existe un marco normativo general, integrado por normativas nacionales e internacionales, que definen las obligaciones que asume el Estado de propiciar a todos los habitantes lo conducente al desarrollo humano,</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>a un ambiente sano, al progreso económico con justicia social y al acceso a una vivienda digna.</p> <p>El Marco de Reasentamiento del PISU se apoya en las normas aplicables de carácter internacional ratificadas por el Gobierno de la República Argentina, en las declaraciones y garantías constitucionales y normas nacionales y provinciales. Durante la ejecución del Programa, se observará y considerará el desplazamiento en caso de enfermedades, así como se analizarán alternativas que aseguren la restitución de tierras y viviendas que no sean propensas a desastres. Si bien este aspecto se encuentra de manera implícita dentro del Marco, se deberá ajustar la redacción de manera que quede escrito explícitamente.</p> <p>De todas formas, teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que no existen brechas.</p>
<p>3. Auditoría de finalización del reasentamiento y presentarla al BID para su aprobación una vez que se hayan completado sustancialmente todas las medidas de mitigación y una vez que se considere que las personas desplazadas han recibido la oportunidad y la asistencia adecuadas para restaurar de manera sostenible sus medios de vida.</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>Según lo establecido en los lineamientos del Marco de Reasentamiento del PISU, hay una etapa de Seguimiento y Monitoreo, en la cual el OE y los organismos provinciales con responsabilidad en la ejecución del Plan de Reasentamiento, tendrán a su cargo el seguimiento de las acciones del Plan, cuyo fin es verificar que las actividades sean efectivas. Para ello seleccionará un conjunto de actividades a monitorear en función del cronograma del Plan. Por otro lado, con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos del Plan en términos de que todos los afectados se encuentren en igual o mejor condición que antes del proyecto, se tomará como base para el seguimiento los datos recopilados durante el Censo Barrial de Reasentamiento. también contempla la etapa de Evaluación que consiste en seis meses después del traslado de las unidades sociales y actividades económicas, realizar la evaluación ex post de la eficacia y eficiencia de la ejecución del Plan. Esta evaluación tendrá como foco principal el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población que fue objeto del Plan.</p> <p>Respecto a la realización de una auditoría y elaboración de Informe de finalización del reasentamiento para presenta ante el BID, no hace referencia.</p> <p>Teniendo en cuenta lo expuesto, se concluye que hay brechas. El OE deberá incluir dentro del Marco de Reasentamiento una etapa final, en la cual se indique la</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		realización de una auditoría de finalización de reasentamiento, una vez que se haya completado sustancialmente el proceso.
4. Grupos vulnerables y desfavorecidos con relación al reasentamiento involuntario.	Sin Brecha	En el marco del PISU, el OE cuenta con un Marco de Reasentamiento elaborado según los lineamientos establecidos en la Política de Reasentamiento Involuntario (OP- 710) del BID, con procedimientos a utilizar en caso de que las actividades del Programa generen reasentamientos involuntarios en la población, considerando grupos vulnerables y desfavorecidos con relación al reasentamiento involuntario. Teniendo en cuenta ello, se concluye que no hay brechas .
5. Indemnización y beneficios para las personas desplazadas.	Existencia de Brecha	La Ley N.º 21.499, establece una indemnización que busca reestablecer la situación patrimonial del sujeto expropiado en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ser privado de su propiedad. Sin embargo, la Ley establece que la indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante, e integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses. Por otra parte, en el marco del PISU, el OE cuenta con un Marco de Reasentamiento elaborado según los lineamientos establecidos en la Política de Reasentamiento Involuntario (OP- 710) del BID, con procedimientos a utilizar en caso de que las actividades del Programa generen reasentamientos involuntarios en la población. En cuanto a este requisito, se incluyen Alternativas de Compensación indicando que las alternativas de compensación serán estudiadas en cada plan de acuerdo con las características de las afectaciones identificadas y las soluciones habitacionales disponibles en cada caso, y se enumeran algunas de las alternativas de compensación posibles. Resulta pertinente realizar una revisión de las medidas de compensación actuales y las medidas que surgen del nuevo MPAS del BID a fin de la actualización de las mismas.
6. Participación comunitaria.	Existencia de Brecha	En el marco del PISU, el OE cuenta con un Marco de Reasentamiento elaborado según los lineamientos establecidos en la OP- 710 del BID dentro de los cuales se incluye la Consulta del Plan, y la implementación de mecanismos de gestión y

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		registro de reclamos. Ambos deberán ser actualizados en función de los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID. Por lo tanto, se concluye que respecto a lo que es participación comunitaria se identifican brechas . debiendo actualizarte el instrumento de Marco de Reasentamiento del Programa AR-L1304 a los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.
7. Mecanismo de reclamación.	Existencia de Brecha	La Ley N.º 21.499, establece que, en caso de no haber avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación, pero no se establece ningún mecanismo de reclamación entre las partes. Por su parte el OE, en el marco del PISU, cuenta con un Marco de Reasentamiento elaborado según los lineamientos establecidos en la OP- 710 del BID, dentro de los cuales se incluye la implementación de mecanismos de gestión y registro de reclamos, los cuales deberán ser actualizados en función de los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID. Por lo tanto, se concluye que respecto a lo que es participación comunitaria se identifican brechas .
8. Planificación y ejecución del reasentamiento y el restablecimiento de medios de subsistencia.	Existencia de Brecha	El Marco de Reasentamiento del PISU presenta lineamientos establecidos en función de la Política de Reasentamiento Involuntario (OP- 710) del BID, con procedimientos a utilizar en caso de que las actividades del Programa generen reasentamientos involuntarios en la población. Los mismos deberán ser actualizados en función de los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.
9. Desplazamiento físico: En los casos de desplazamiento físico, elaborar un plan de acción de reasentamiento que abarque, como mínimo, los requisitos aplicables de esta Norma de Desempeño,	Existencia de Brecha	El Marco de Reasentamiento del PISU presenta lineamientos establecidos en función de la Política de Reasentamiento Involuntario (OP- 710) del BID, con procedimientos a utilizar en caso de que las actividades del Programa generen reasentamientos involuntarios en la población. Los mismos deberán ser actualizados en función de los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
independientemente del número de personas afectadas.		
10. Desplazamiento económico: En el caso de Proyectos solamente con desplazamiento económico, elaborar un plan de restablecimiento de los medios de subsistencia para compensar a las personas afectadas por el Proyecto y ofrecer otra asistencia en cumplimiento de los objetivos de esta Norma de Desempeño.	Existencia de Brecha	En el Marco de Reasentamiento del PISU no se incluye referencia a casos de proyectos que requieran la elaboración de un plan de restablecimiento de medios de subsistencia por desplazamiento económico. El OE deberá incluir en los lineamientos del Marco de Reasentamiento, un Plan de Acción para llevar adelante un proceso de desplazamiento económico, siguiendo los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.
11. Coordinación entre organismos gubernamentales: En los casos en que la adquisición de tierras y el reasentamiento sean responsabilidad de un organismo gubernamental distinto del encargado de ejecutar el Proyecto, el prestatario colaborará con el organismo responsable para lograr resultados conformes con la presente Norma de Desempeño.	Existencia de Brecha	El Marco de Reasentamiento del PISU indica que en las intervenciones que generen reasentamiento existirá una estrecha relación entre las etapas técnicas del proyecto y las obras asociadas y la formulación y ejecución del Plan de Reasentamiento. Esto garantizará la resolución de las afectaciones en el momento de iniciar la construcción de las obras y dará el tiempo necesario para su ejecución. Luego describe la relación entre las etapas y las actividades del Plan. Contemplando que resta incluir lineamientos para la elaboración de un plan de restablecimiento de medios de vida, se concluye que existen brechas para cumplir con este requerimiento . El OE deberá ajustar la sección “Articulación de las Etapas de los Proyectos con el Plan de Reasentamiento”.
NDAS 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos		
1. Identificar los riesgos e impactos, directos, indirectos y	Sin Brecha	El art. 41 de la Constitución Nacional establece la obligación de las autoridades de proveer a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
acumulativos de los proyectos del Programa sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, e identificar todo impacto residual importante. Definirse medidas para minimizarlos y restaurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos		<p>naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. Asimismo, la República Argentina es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobando su texto mediante la Ley N.º 24.375, el cual establece en su art. 7 la obligación de los Estados de proceder, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de los componentes de la diversidad biológica identificados de conformidad con el apartado a), prestando especial atención a los que requieran la adopción de medidas urgentes de conservación y a los que ofrezcan el mayor potencial para la utilización sostenible; e identificará los procesos y categorías de actividades que tengan, o sea probable que tengan, efectos perjudiciales importantes en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento de esos efectos. Por último, la Ley N.º 25.675, establece en su art. 13 que los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos. Teniendo en cuenta todo ello, se concluye que Identificar los riesgos e impactos, directos, indirectos y acumulativos de los proyectos del programa sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos está previsto en la normativa nacional,</p> <p>De todas formas, dada la tipología y alcance de obras del Programa bajo análisis, no se esperan impactos y riesgos en materia de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Igualmente, dentro del MGAS del PISU, se incluye como parte del PGAS un programa sobre Manejo de Flora y Fauna, y control de plagas.</p> <p>Por lo expuesto se concluye que no existen brechas.</p>
2. En áreas de hábitat crítico, no se implementará ninguna actividad del Programa a menos que se cumplan una serie de requisitos específicos, que incluyen ningún impacto	Sin Brecha	<p>Si bien, la Ley N.º 25.675, establece en su art. 13 que los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos, no existe normativa nacional que establezca expresamente la prohibición de implementar ninguna actividad del programa a menos que se cumplan una serie de requisitos específicos, que incluyan ningún impacto adverso medible y ninguna</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
adverso medible y ninguna reducción en las poblaciones de especies CR o EN, y la implementación de Programas de Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad.		reducción en las poblaciones de especies CR o EN, y la implementación de Programas de Monitoreo y Evaluación de la Biodiversidad. De todas formas, dada la tipología y alcance de obras del Programa bajo análisis, no se esperan impactos y riesgos en hábitats críticos. Asimismo, estarán excluidas actividades que correspondan a Categoría A o riesgo Ambiental y Social Alto. Por lo expuesto se concluye que no se identifican brechas .
3. Especies exóticas invasoras y enfermedades zoonóticas.	Existencia de Brecha	La República Argentina es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobando su texto mediante la Ley N.º 24.375, estableciendo en su art. 8 inc. h) que las partes deberán impedir que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies. Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aprobó mediante Resolución N.º 109/21 la lista oficial de especies exóticas invasoras y exóticas potencialmente invasoras. Asimismo, mediante la Resolución N.º 211/22 se aprobó la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. En cuanto a las enfermedades zoonóticas, a nivel nacional existe la Ley N.º 15.465 que establece el régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria, y la Resolución N.º 1812/11 que crea el PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS, teniendo como objetivos principales disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades zoonóticas. Por su parte el OE, dentro del PGAS (MGAS – PISU) contempla un Programa de Manejo de Flora, Fauna y plagas, en el cual no se incluye mención a la prohibición de especies exóticas invasores y enfermedades zoonóticas. Teniendo en cuenta todo ello, se concluye que existen brechas . El OE deberá incluir dentro de los lineamientos del mencionado Programa del PGAS, medidas sobre la prohibición de especies exóticas invasoras y enfermedades zoonóticas.
4. Producción primaria o la recolección de recursos naturales vivos, incluida la silvicultura natural y de plantaciones, la agricultura, la	Sin Brechas	La agricultura, ganadería y pesca son actividades productivas claves para nuestro país, por lo que existe diversa normativa nacional y provincial e instrumentos de gestión para brindar acompañamiento a los productores y productoras agropecuarios. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación es la responsable de diseñar y ejecutar planes de producción, comercialización y sanitarios en el ámbito agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial.

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
cría de animales, la acuicultura y la pesca.		Dada la tipología y alcance de obras del Programa bajo análisis, no se contemplarán actividades de producción primaria, o recolección de recursos naturales vivos.
NDAS 7: Pueblos Indígenas		
<p>1. Promover beneficios y oportunidades de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas de una manera culturalmente apropiada</p> <p>2. Evitar impactos desproporcionados en grupos vulnerables y desfavorecidos (grupos de PI).</p> <p>3. Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en tres circunstancias (i) impactos en tierras y recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario; (ii) reubicación de pueblos indígenas fuera de sus tierras y recursos naturales sujetos al régimen de propiedad tradicional o bajo uso consuetudinario; y (iii) impactos en el patrimonio cultural).</p>	No Aplica	<p>Aunque los Proyectos a financiarse bajo el programa no presentan afectaciones a comunidades ni pueblos indígenas, es importante señalar que el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional establece que le corresponde al Congreso de la Nación reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Es decir, que la norma supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.</p> <p>Asimismo, la República Argentina ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, aprobando su texto mediante la Ley N.º 24.071. Este instrumento hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación. También establece el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a ser consultados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevea la adopción de medidas administrativas o legislativas que puedan afectarlos directamente. No solo es un derecho, sino que constituye, a su vez, un instrumento de participación en las decisiones que les conciernen a los pueblos indígenas. Es decir, el Estado está obligado a consultar a las comunidades antes de formular o aplicar un programa o proyecto de desarrollo, de autorizar la explotación de recursos naturales en sus territorios, o de implementar una política pública susceptible de afectarles directamente.</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>Teniendo en consideración el MGAS elaborado para el PISU, en el mismo se indica que el Programa no se desarrollará en territorios indígenas, ni financiará actividades que tengan el potencial de generar impactos adversos significativos sobre pueblos indígenas.</p> <p>En cuanto al Programa AR-L1361 bajo análisis, se concluye lo mismo, con lo cual no se realiza el análisis de brechas sobre esta NDAS.</p>
NDAS 8: Patrimonio Cultural		
<p>1. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos sobre el patrimonio cultural tangible (objetos tangibles muebles o inmuebles, propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor arqueológico, paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso), e intangible (conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de comunidades que representan estilos de vida tradicionales).</p>	Existencia de Brecha	<p>A nivel nacional, la Ley N.º 21.836 aprueba la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y establece las definiciones del patrimonio cultural y natural e incluye texto del Convenio. Asimismo, la Ley N.º 25.743 tiene por objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.</p> <p>En adición, el Decreto N.º 1022/04, establece que las personas físicas o jurídicas, responsables de emprendimientos deberán prever la necesidad de realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar eventuales restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos. De verificarse su existencia, deberán facilitar el rescate de estos. Las tareas que se realicen a ese efecto deberán ser aprobadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional.</p> <p>Por su parte el OE, dentro del PGAS (MGAS – PISU) contempla un Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos y Hallazgos Fortuitos. Si bien las zonas de implementación de los proyectos no tienen potencial arqueológico, y no se prevén impactos o riesgos sobre el patrimonio cultural o arqueológico, se deberá contar con un protocolo para el caso de que durante las excavaciones ocurran eventuales hallazgos de elementos con presunto valor patrimonial.</p> <p>Dado que el mencionado Programa contempla solo patrimonio cultural tangible, para este requisito se identifican brechas. El OE deberá incluir en los lineamientos del Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos y Hallazgos Fortuitos referencia a la identificación y manejo en caso de patrimonio cultural intangible.</p>
<p>2. Protección del patrimonio cultural en el</p>	Sin Brecha	<p>La normativa nacional, en el Decreto N.º 1022/04, establece que si en el curso de ejecución de obras públicas o privadas, que implique movimientos de tierra, se</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
diseño y la ejecución de los Proyectos.		hallaren fósiles u objetos arqueológicos, o se supiera que determinados sectores, regiones o zonas, constituyen yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, que por su tamaño, valoración patrimonial, científica y/o estado de preservación requieran especial cuidado, protección absoluta o parcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad de aplicación jurisdiccional podrá solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de adoptar medidas tendientes a lograr la suspensión de las obras o proyectos en forma definitiva o temporal, según el caso. Asimismo, el OE, dentro del PGAS (MGAS – PISU) contempla un Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos y Hallazgos Fortuitos.
3. Contar con un procedimiento sobre hallazgo fortuito con disposiciones para gestionar los hallazgos fortuitos, que se aplicará si posteriormente se descubre patrimonio cultural en el Proyecto.	Sin Brecha	Habida cuenta que la normativa nacional establece la obligación de realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar eventuales restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos, y que el OE en el MGAS correspondiente al PISU cuenta con un Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos y Hallazgos Fortuitos, se concluye que no hay brechas .
NDAS 9: Igualdad de Género		
1. Cerciore de que no haya impactos desproporcionales sobre personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género (LGBTQI+), y que se les permita participar y aprovechar los beneficios de las operaciones de manera equitativa.	Sin Brecha	El derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23), y en diversos instrumentos internacionales de los que la República Argentina forma parte, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 2), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) (artículos 1, 13.5, 17.4 y 24), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículos 2 .1, 3, 20.2, 23.4, 24.1, 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2.2 y 3), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2, 3 y ss.).

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>Asimismo, a nivel nacional se aprobó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 que adopta medidas focalizadas tendientes a revertir los obstáculos legales y fácticos frente a los que se encuentran, histórica y estructuralmente, mujeres y LGBTI+ para el ejercicio efectivo de todos sus derechos.</p> <p>En adición, el Programa AR-L1361 contempla acciones que expresamente incorporan el enfoque de género y diversidades: Componente II (Mejora de las condiciones habitacionales de los HV); Componente III (Integración socio urbana de BP, Subcomponente III.2 Ordenamiento territorial y seguridad de la tenencia); y Componente IV (Desarrollo socioeconómico y comunitario en BP con perspectiva de género y diversidades).</p> <p>Asimismo, entre los beneficiarios del Programa se priorizarán los HV localizados en zonas con vulnerabilidad climática mitigable y liderados por mujeres, personas LGTBQ+, adultos mayores, migrantes y/o a cargo de personas con diversidad funcional.</p> <p>Teniendo en cuenta todo ello, se considera que no existen brechas.</p>
<p>2. Analizar el riesgo de que el Programa incremente la violencia de género y definir medidas para prevenirlo, mitigarlo y atenderlo.</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>A nivel nacional, existe la Ley N.º 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Esta ley fue sancionada en consonancia con los preceptos de la Convención de Belém do Pará. Según el artículo 2, tiene como objeto promover y garantizar: “a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; y g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia”. También, está la Ley N.º 27.580 de aprobación del</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo –Convenio 190– de la Organización Internacional del Trabajo (2020). El Convenio N.º 190 de la OIT es el primer tratado internacional en abordar de manera específica y exhaustiva las violencias y el acoso en el ámbito laboral con el objetivo de promover y asegurar el derecho de todas las personas a desarrollarse en ámbitos de trabajo libres de violencia y acoso.</p> <p>Por su parte, el Programa AR-L1361, en los Componentes II, III y IV contempla acciones que incorporan el enfoque de género y diversidades, en línea con esta Norma.</p> <p>Sin embargo, en lo que respecta al OE, el MGAS del PISU contiene una Ficha Ambiental y Social (Anexo 1) cuyo fin es identificar tempranamente las complejidades, criticidades y condicionantes de los proyectos. Dentro de la sección “Aspectos Socioeconómicos y Culturales” no se incluye como punto a valorar la potencial incidencia del Programa sobre la violencia de género. En este sentido, será necesario realizar los ajustes correspondientes a la Ficha para incluir el análisis sobre este aspecto.</p> <p>Considerando lo expuesto se concluye que existen brechas para el cumplimiento de este requerimiento.</p>
<p>3. Considerar y atender el riesgo de abuso de menores y explotación sexual en los proyectos.</p>	<p>Sin Brecha</p>	<p>A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Argentina logró importantes avances en la protección de la niñez y la adolescencia. Los artículos que refieren específicamente a abuso sexual, trata, y explotación comercial son: 19, 34, 35 y 36. Asimismo, el Código Penal contempla penas privativas de libertad para quienes cometan los delitos de abuso sexual contra niños, corrupción de menores, comercialización de pornografía infantil y trata y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. También, en el año 2005 se sancionó la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (N.º 26.061), que brinda el marco local a la Convención. Por su parte, la Ley N.º 26.485 de Protección Integral a las Mujeres contempla las violencias contra niñas, niños y adolescentes y articula con la Ley 26.061.</p> <p>La Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable es un instrumento de prevención de la violencia sexual y de</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		<p>contención. También, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 expresa que las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos, establecidos en la Ley N° 26.061 y obliga a los docentes a proteger y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia que se encuentren bajo su responsabilidad.</p> <p>La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (N° 26.364) que contempla los derechos de las víctimas y que hace especial hincapié en los derechos de las niñas y niños estipulando que en ningún caso podrán ser sometidos a careos, que no se pueden restringir sus derechos y garantías, ni privarlos de su libertad, y procura la reintegración de las víctimas a su familia nuclear o ampliada o a su comunidad.</p> <p>Por su parte, el OE, dentro de los lineamientos del PGAS correspondiente al MGAS del PISU, cuenta con un Programa de Gestión de Trabajadores en el cual incluye un Código de Conducta. El mismo aborda, entre varios temas, los siguientes puntos: “Deberá ser respetada una conducta adecuada en el camino para el trabajo, garantizando la seguridad y tranquilidad de la comunidad vecina a la obra”; y “se prohíbe explícitamente cualquier conducta de acoso sexual u hostigamiento contra las mujeres, niños y niñas de la comunidad, así como contra trabajadoras de la empresa”.</p> <p>Teniendo en cuenta todas las disposiciones, y el alcance de las obligaciones establecidas, se concluye que no existen brechas.</p>
<p>4. Participación equitativa de personas de todos los géneros en las consultas.</p>	<p>Existencia de Brecha</p>	<p>Teniendo en cuenta que el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación se encuentran previstos en la Constitución Nacional (artículos 16, 37 y 75 incisos 2, 19, 22 y 23) y en diversos instrumentos internacionales, como así también la existencia del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 que adopta medidas focalizadas tendientes a revertir los obstáculos legales y fácticos frente a los que se encuentran, histórica y estructuralmente, mujeres y LGBTI+ para el ejercicio efectivo de todos sus derechos.</p> <p>Particularmente en lo que respecta al Plan de Consulta, en el MGAS del PISU se incluyen lineamientos generales del proceso de consulta pública, faltando mencionar de manera explícita la participación equitativa de personas de todos</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		los géneros. En este sentido, deberán realizarse los ajustes correspondientes para el Programa AR-L1361.
NDAS 10: Participación de las partes interesadas y divulgación de Información		
1. Desarrollar plan de consulta y de participación informada con las partes interesadas.	Existencia de Brecha	<p>La normativa nacional consagra el derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. Sin embargo, la normativa no contempla la obligación de desarrollar plan de consulta y de participación informada con las partes interesadas.</p> <p>En lo que respecta al OE, en el MGAS del PISU se incluyen lineamientos generales del proceso de Consulta Pública, requiriendo mayor desarrollo para atender los requerimientos establecidos en esta Norma para el desarrollo de un Plan de Participación de las Partes Interesadas. Por lo tanto, en cumplimiento con esta norma, el OE deberá elaborar un Plan de Participación de las Partes Interesadas.</p>
2. Desarrollar un mecanismo de reclamación, incluidos procedimientos específicos para la violencia sexual y de género.	Existencia de Brecha	<p>En materia normativa nacional, específicamente la Ley N.º 25.675, establece que la participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados. También, por normativa toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. No obstante, y fundamentalmente durante la ejecución del proyecto, la normativa nacional no prevé obligaciones relativas a la gestión de las quejas y reclamos de comunidades, personas afectadas y partes interesadas, sino que garantiza el derecho de las personas a acceder a la información pública ambiental o bien a la justicia (pudiendo interponer una acción de amparo).</p> <p>En lo que respecta al OE, en el MGAS del PISU se cuenta con lineamientos para llevar adelante un Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos</p>

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		(MARRC), pero el mismo no hace referencia específica al abordaje de violencia sexual y de género. Por lo tanto, el OE deberá incluir en el MARRC un procedimiento de quejas y reclamos específico para aplicar en casos de violencia sexual y/o de género.
3. Informar sobre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI).	Existencia de Brecha	La normativa nacional no prevé expresamente la obligación de informar sobre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID. En cuanto al OE, tampoco cuenta con un canal de información sobre el MICI, con lo cual el OE deberá informar a las partes interesadas sobre el mecanismo independiente del BID. Se recomienda que esta comunicación se realice durante el proceso de consulta pública del Programa y a través de la página del OE.
4. Divulgar información sobre el Programa para que las partes interesadas puedan entender los riesgos e impactos que entraña y las oportunidades potenciales y beneficios de desarrollo que el Proyecto presenta.	Existencia de Brecha	La Ley N° 25.831 establece el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, garantizando el derecho de acceso a dicha información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Por su parte el OE, dentro del MGAS-PISU, cuenta además del proceso de Consulta Pública, con uno de los programas del PGAS “Programa de Comunicación, Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos”. Sin embargo, como ya se ha mencionado, se deberá elaborar el Plan de Participación de Partes Interesadas, orientado a garantizar la participación e interacción durante todo el ciclo de vida de los proyectos.
5. Participación durante la ejecución del Programa y presentación de informes externos.	Existencia de Brecha	La normativa nacional consagra el derecho de toda persona a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. Sin embargo, la normativa no contempla la obligación de desarrollar plan de consulta y de participación informada con las partes interesadas. Asimismo, la Ley N° 25.831 establece el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, garantizando el derecho de acceso a dicha información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Sin

Requisitos	Análisis de Brechas (Existencia de Brecha – Sin Brecha)	Justificación
		embargo, la normativa no contempla la obligación de brindar información pertinente y presentar informes a las personas afectadas y las partes interesadas. Teniendo en cuenta ello, se deberá elaborar el PPPI incluyendo como una de las acciones el seguimiento y presentación de informes.
6. Capacidad y compromiso organizacionales: El prestatario definirá funciones, responsabilidades y facultades claras y señalará los recursos humanos y financieros específicos asignados a la aplicación y el seguimiento de las actividades de participación de las partes interesadas, a fin de alcanzar los objetivos de esta Norma de Desempeño.	Existencia de Brecha	El OE deberá definir funciones y responsabilidades para la implementación del PPPI, a fin de alcanzar los objetivos de esta Norma.

6 Indicadores de Gestión Ambiental y Social

Para dar seguimiento a las intervenciones contempladas en el marco del Programa, y dada la naturaleza de la operación (Préstamo Basado en Resultados), se proponen los siguientes indicadores de desempeño ambiental y social a fin de evaluar la implementación del Programa durante su ejecución.

Tabla 25 – Indicadores de Gestión Ambiental y Social del Programa AR-L1361

Indicador	Medición	Indicador de Éxito	Responsable
Porcentaje de quejas no resueltas durante el mes sobre el total de quejas registradas en el marco del Programa	(Cantidad de quejas y reclamos no resueltos en el mes) / (Cantidad total de quejas y reclamos registrados en el mes correspondientes al Programa) x 100	0%	OE
Número de No Conformidades (ambientales, sociales y de seguridad e higiene) no resueltas identificadas en el mes mediante inspecciones, visitas, auditorías y otros mecanismos empleados	Informes de inspección de obra. Informes de Auditoría.	0	OE
Índice de Gravedad (accidentes ocupacionales)	(Número de accidentes graves x 200.000) / (horas-hombre trabajadas en el período)	0	OE
Índice de Incidencia de Accidentes Mortales (accidentes ocupacionales)	(Número de accidentes mortales x 200.000) / (Número de trabajadores expuestos)	0	OE
Número de accidentes de la comunidad ocurridos en el mes	Número total de accidentes sufridos por la comunidad en el mes	0	OE
Número de Accidentes Ambientales ocurridos en el mes	(Número de accidentes ambientales gestionados de acuerdo con el procedimiento definido) / (Número total de accidentes ambientales ocurridos en el proyecto)	0	OE

7 Conclusiones

Puede concluirse que el sistema normativo nacional es completo y en líneas generales cubre la mayoría de los requerimientos del MPAS del BID. Por su parte, el Organismo Ejecutor cuenta con un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) correspondiente al Programa de Integración Socio Urbana (PISU) basado en las Políticas de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID. Si bien el MGAS presenta una buena cobertura de los temas, requiere ser actualizado a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID.

En la **Tabla 26** se presenta un resumen de las brechas identificadas durante el análisis realizado en función del MPAS y las diez NDAS, tomando como referencia los instrumentos de gestión socioambiental con los que cuenta el Organismo Ejecutor.

Las brechas identificadas deberán ser trabajadas a través de un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) acordado entre el Organismo Ejecutor y el BID.

Tabla 26 – Resumen de Brechas identificadas de Programa AR-L1361

Requisitos	Brechas identificadas
Marco de Política Ambiental y Social	
1. Clasificación de Impactos y Riesgos de los Proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia la Ficha Ambiental y Social (Anexo 1 del MGAS del PISU) se requiere incluir el tipo de Categoría del Proyecto bajo evaluación (quedando excluidos de financiamiento los proyectos Categoría A), y reemplazar la mención de las Políticas de Salvaguardas por las NDAS.
2. Divulgación de información	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere iniciar un proceso de consulta pública, avanzando con un proceso de socialización del Programa, el resultado de este Análisis y acciones a seguir. Dicho proceso continuará durante la etapa de ejecución.
3. Conocimiento de los requisitos del MPAS del BID y sus NDAS por parte del OE.	<ul style="list-style-type: none"> El equipo del OE cuenta con experiencia en la implementación de proyectos bajo las Políticas de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID, pero no bajo el nuevo Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS). Se sugiere realizar un taller de capacitación en el nuevo MPAS del BID.
4. Aplicación de las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial en los Proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> Deberá incluirse en el MGAS del Programa referencia a las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo Banco Mundial como parte de la normativa aplicable al Programa.
NDAS 1: Evaluación y Gestión de los Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales	
5. Determinar y evaluar los riesgos y los impactos ambientales y sociales de los proyectos a financiarse en el marco del programa.	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá incluir, dentro del análisis de impactos de los proyectos que se ejecuten en el marco del Programa, la identificación y análisis de impactos acumulativos, tal lo establecido en esta Norma.
6. Planes de manejo para gestionar los riesgos e impactos identificados durante la ejecución del Programa.	<p>Tomando como referencia los Programas del PGAS del MGAS-PISU, para la preparación de este Programa se requieren los siguientes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mayor desarrollo de los Programas del PGAS y seguir una misma estructura en la presentación de la información. Por ejemplo: Objetivo del Programa, Impactos a evitar, medidas de mitigación propuestas, indicadores de medición, responsables. Los programas que se incluyen en materia de higiene y seguridad están orientados a los trabajadores, siendo necesario también incluir medidas en materia de salud y seguridad comunitaria.

Requisitos	Brechas identificadas
	<ul style="list-style-type: none"> El Programa de Manejo de flora, fauna y plagas, se sugiere separarlo y desarrollar el Programa de control de plagas, como otro programa distinto al de manejo de flora y fauna.
7. Definir una estructura organizativa que defina las funciones, responsabilidades y facultades para la aplicación del SGAS.	<ul style="list-style-type: none"> El OE deberá documentar el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) a nivel de Programa, tal lo establecido en la presente Norma, definiendo una estructura organizativa.
8. Preparar y mantener implementado un sistema de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia los procedimientos que se mencionan dentro del Programa de Contingencias del MGAS-PISU, se requiere mayor desarrollo de estos, e incluir la elaboración de un protocolo de actuación en caso de corte de servicios.
9. Procedimientos para hacer el seguimiento del programa de gestión y medir su eficacia.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el anexo 7 del MGAS-PISU donde se incluye un modelo de IASS, el cual contiene una Planilla de Verificación del Cumplimiento de las Condiciones Ambientales y Sociales, será necesario realizar los ajustes que se indicaron en relación con el PGAS en el punto 4 de esta tabla.
10. Contar con un plan de participación de las partes interesadas acorde con los riesgos e impactos de los Proyectos y su etapa de desarrollo.	<ul style="list-style-type: none"> En el marco de la preparación de este Programa, será necesario desarrollar un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), tal como lo establece la NDAS 10.
11. Presentar informes al menos anuales a las personas afectadas y otras partes interesadas.	<ul style="list-style-type: none"> El OE deberá incluir dentro del MGAS lineamientos para la presentación de informes periódicos a las personas afectadas por el proyecto (sea en materia de reasentamiento o no), y a otras partes interesadas pertinentes en los que describirá los avances en la ejecución del proyecto, planes de acción con respecto a cuestiones que conlleven riesgos o impactos activos para las personas afectadas y acerca de las cuestiones que se hayan planteado en el proceso de consulta o el mecanismo de reclamación como inquietudes de esas comunidades. La frecuencia de los informes deberá ser proporcional a las preocupaciones de las personas afectadas por el proyecto, pero su periodicidad deberá ser, como mínimo, anual.
12. Establecer y mantener un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS)	<ul style="list-style-type: none"> Será necesario que el OE documente el Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) a nivel de Programa, estructurado y contemplando los siete

Requisitos	Brechas identificadas
	<p>elementos del SGAS: (i) marco ambiental y social específico según el proyecto, (ii) identificación de riesgos e impactos, (iii) programas de gestión, (iv) capacidad y competencia organizativas, (v) preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, (vi) participación de las partes interesadas y (vii) seguimiento y evaluación.</p>
<p>13. Contar con un mecanismo de reclamación por parte del OE para los Proyectos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De la revisión de la planilla del Sistema de Atención de Quejas y Reclamos del MGAS-PISU se identifica, como mejora, incluir una columna con la denominación “Obra-Programa/Otro” o similar, a fin de identificar fácilmente, y sistematizar, las quejas y reclamos por intervención, y aquellas que no corresponden con la ejecución del programa y requieran otro canal de tratamiento.
<p>NDAS 2: Trabajo y Condiciones Laborales</p>	
<p>14. Adoptar y aplicar políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño de los Proyectos y su fuerza laboral.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá desarrollar lineamientos para la elaboración de un Procedimiento de Gestión Laboral (PGL), tal lo indicado por esta Norma.
<p>15. Proporcionar a los trabajadores información documentada, clara y comprensible, sobre sus derechos de acuerdo con la legislación nacional en el ámbito laboral y de empleo y cualquier convenio colectivo aplicable, incluidos sus derechos con respecto a horas de trabajo, salario, horas extra, remuneración, jubilación y otras prestaciones, desde el comienzo de la relación laboral y cuando se produzca cualquier cambio sustancial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere verificar la inclusión de una cláusula en los contratos con las empresas contratistas que indique lo expuesto en este requerimiento.
<p>16. Respetar y asegurar términos de empleo para los convenios de negociación colectivas con las organizaciones laborales (sindicatos).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere verificar la inclusión de una cláusula en los contratos con las empresas contratistas que indique lo expuesto en este requerimiento.
<p>17. Asegurar términos de empleos y condiciones laborales sustancialmente equivalentes a los de los trabajadores no migrantes que realizan labores similares.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere verificar la inclusión de una cláusula en los contratos con las empresas contratistas que indique lo expuesto en este requerimiento.
<p>18. Establecer y mantener políticas y procedimientos sobre la No discriminación e igualdad de oportunidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el MGAS del PISU, para la elaboración del MGAS del Programa AR-L1361 se requiere incluir un análisis sobre aspectos relacionados a la no discriminación, e incluir su abordaje en el Programa de Capacitación del PGAS.

Requisitos	Brechas identificadas
19. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos relacionados con el trabajo y las condiciones laborales, incluidos trabajadores migrantes.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el MGAS del PISU, para la elaboración del MGAS del Programa AR-L1361 se deberá incluir mención sobre la evaluación y gestión de riesgos e impactos, incluyendo trabajadores migrantes.
20. Evaluar los riesgos e impactos relacionados con los trabajadores de la cadena de suministro primaria.	<ul style="list-style-type: none"> En la elaboración del MGAS del Programa AR-L1361, se deberá contemplar la evaluación de riesgos e impactos relacionados con los trabajadores de la cadena de suministro primaria.
21. Elaboración y aplicación de un Mecanismo de Reclamos para los trabajadores.	<ul style="list-style-type: none"> En cumplimiento con lo establecido en esta Norma, se deberá elaborar un procedimiento o mecanismo para atender quejas, reclamos y consultas destinado únicamente a trabajadores.
NDAS 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contaminación	
22. Adoptar medidas para evitar o reducir el consumo de agua, a fin de que el consumo generado por el Proyecto no tenga impactos adversos importantes sobre las personas y la biodiversidad.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el PGAS del MGAS-PISU, se sugiere incluir dentro del Programa de Capacitación, capacitación a trabajadores sobre la adopción de medidas para evitar o reducir el consumo de agua durante la ejecución de los trabajos.
23. Emplear principios y técnicas de eficiencia de recursos y prevención de la contaminación consistentes con las guías buenas prácticas industriales internacionales (GIIP)	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá incluir en el MGAS del programa mención a los principios y técnicas de eficiencia de recursos y prevención de la contaminación consistentes con las guías buenas prácticas industriales internacionales (GIIP).
24. Gestionar el control de plagas adecuadamente. No utilizar plaguicidas prohibido por la OMS.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el PGAS del MGAS-PISU, se considera pertinente elaborar el Programa de Control de Plagas de manera separa al Programa de Manejo de Flora y Fauna, y verificar que contenga los ítems que refiere la Norma.
NDAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad	
25. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos de salud y seguridad de la comunidad, incluido los impactos desproporcionados sobre las personas vulnerables y establecer medidas de gestión coherentes con las buenas prácticas industriales internacionales.	<ul style="list-style-type: none"> A fin de dar cumplimiento a esta Norma, será necesario desarrollar en el PGAS un Programa sobre salud y seguridad comunitaria, o bien incluir medidas dentro del programa de salud, higiene y seguridad laboral que cuenta actualmente el PGAS del MGAS-PISU, de manera de abordar la gestión de los riesgos a nivel ocupacional y comunitario.
26. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos asociados a la exposición de la comunidad a enfermedades.	<ul style="list-style-type: none"> Considerando el contexto en relación con el COVID-19 (SARS-CoV-2), se recomienda incluir un programa en el PGAS con medidas para actuar en

Requisitos	Brechas identificadas
	caso de exposición de la comunidad a enfermedades infectocontagiosas, para ser aplicado ante una eventualidad.
27. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos asociados con la preparación y respuesta de emergencia adecuadas de la operación.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el PGAS del MGAS-PISU, se requiere mayor desarrollo del Programa de Contingencias ya que el mismo menciona, en líneas generales, los procedimientos que deberán desarrollarse en caso de emergencia durante la ejecución de las obras. Será necesario presentar mayor desarrollo de cada uno, e incluir referencia a la elaboración de un protocolo de actuación en caso de corte de servicios.
28. Requisito de que el prestatario evalúe y gestione los riesgos hacia la comunidad asociados al uso de personal de seguridad.	<ul style="list-style-type: none"> En caso de existir riesgo de conflicto entre la ejecución del Programa y la comunidad, se deberá contratar personal de seguridad. En este caso, el OE deberá adoptar un código de conducta para suplidores de seguridad alineado con los principios de proporcionalidad y buenas prácticas internacionales en materia de contratación, normas de conducta, capacitación, equipamiento y supervisión de dichos trabajadores. Considerar que el mecanismo de gestión de quejas específico para trabajadores indicado anteriormente en cumplimiento con la NDAS 2 deberá ser extensivo para todo el personal contratado.
NDAS 5: Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario	
29. Considerar diseños alternativos viables del Proyecto para evitar o minimizar el desplazamiento físico o económico, sopesando los costos y beneficios ambientales, sociales y financieros, con especial atención a los impactos sobre grupos pobres y vulnerables.	<ul style="list-style-type: none"> Considerando que se cuenta con un Marco de Reasentamiento elaborado según los lineamientos establecidos en la Política de Reasentamiento Involuntario (OP- 710) del BID, el mismo deberá actualizarse en función de los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.
30. No desplazar a personas a áreas con brotes activos de enfermedades o áreas propensas a desastres.	<ul style="list-style-type: none"> Si bien este aspecto se encuentra de manera implícita dentro del Marco de Reasentamiento del PISU, como parte de la actualización del Marco de Reasentamiento a los requerimientos del MPAS, se deberá ajustar la redacción de manera que quede escrito explícitamente.
31. Auditoría de finalización del reasentamiento y presentarla al BID para su aprobación una vez que se hayan completado sustancialmente todas las medidas de mitigación y una vez que se considere que las personas desplazadas han recibido la oportunidad	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá incluir dentro del Marco de Reasentamiento del Programa AR-L1361 una etapa final, en la cual se indique la realización de una auditoría de finalización de reasentamiento, una vez que se haya completado sustancialmente el proceso.

Requisitos	Brechas identificadas
y la asistencia adecuadas para restaurar de manera sostenible sus medios de vida.	
32. Indemnización y beneficios para las personas desplazadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Como parte de la actualización del Marco de Reasentamiento a los requerimientos del MPAS, resulta pertinente realizar una revisión de las medidas de compensación actuales y las medidas que surgen del nuevo MPAS del BID.
33. Participación comunitaria y Mecanismo de reclamación	<ul style="list-style-type: none"> • Como parte de la actualización del Marco de Reasentamiento en función de los requerimientos del MPAS, el proceso de la Consulta de los Planes de Reasentamiento, y el mecanismo de gestión y registro de reclamos deberán ser actualizados en función de los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.
34. Planificación y ejecución del reasentamiento y el restablecimiento de medios de subsistencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Tomando como referencia el Marco de Reasentamiento del PISU, los lineamientos que presenta deberán ser actualizados en función de los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.
35. Desplazamiento físico: En los casos de desplazamiento físico, elaborar un plan de acción de reasentamiento que abarque, como mínimo, los requisitos aplicables de esta Norma de Desempeño, independientemente del número de personas afectadas.	
36. Desplazamiento económico: En el caso de Proyectos solamente con desplazamiento económico, elaborar un plan de restablecimiento de los medios de subsistencia para compensar a las personas afectadas por el Proyecto y ofrecer otra asistencia en cumplimiento de los objetivos de esta Norma de Desempeño.	<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá incluir en los lineamientos del Marco de Reasentamiento del Programa AR-L1361, un Plan de Acción para llevar adelante un proceso de desplazamiento económico, siguiendo los requerimientos del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID.
37. Coordinación entre organismos gubernamentales: En los casos en que la adquisición de tierras y el reasentamiento sean responsabilidad de un organismo gubernamental distinto del encargado de ejecutar el Proyecto, el prestatario colaborará con el organismo responsable para lograr resultados conformes con la presente Norma de Desempeño.	<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá ajustar la sección “Articulación de las Etapas de los Proyectos con el Plan de Reasentamiento”.

Requisitos	Brechas identificadas
NDAS 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de Recursos Naturales Vivos	
38. Especies exóticas invasoras y enfermedades zoonóticas.	<ul style="list-style-type: none"> El OE deberá incluir dentro de los lineamientos del Programa de Manejo de Flora y Fauna del PGAS, medidas sobre la prohibición de especies exóticas invasoras y sobre enfermedades zoonóticas.
NDAS 7: Pueblos Indígenas	
No Aplica	
NDAS 8: Patrimonio Cultural	
39. Evaluar y gestionar los riesgos e impactos sobre el patrimonio cultural tangible (objetos tangibles muebles o inmuebles, propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor arqueológico, paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso), e intangible (conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de comunidades que representan estilos de vida tradicionales).	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el PGAS del MGAS-PISU, se deberá incluir en los lineamientos del Programa de Manejo de Recursos Culturales Físicos y Hallazgos Fortuitos referencia a la identificación y manejo en caso de patrimonio cultural intangible.
NDAS 9: Igualdad de Género	
40. Analizar el riesgo de que el Programa incremente la violencia de género y definir medidas para prevenirlo, mitigarlo y atenderlo.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el MGAS-PISU, se requiere actualizar la Ficha Ambiental y Social (Anexo 1) ya que dentro de la sección “Aspectos Socioeconómicos y Culturales” no se incluye como punto a valorar la potencial incidencia del Programa sobre la violencia de género.
41. Participación equitativa de personas de todos los géneros en las consultas.	<ul style="list-style-type: none"> Tomando como referencia el MGAS-PISU, se incluyen lineamientos generales sobre el proceso de consulta pública, faltando mencionar de manera explícita la participación equitativa de personas de todos los géneros.
NDAS 10: Participación de las partes interesadas y divulgación de Información	
42. Desarrollar plan de consulta y de participación informada con las partes interesadas.	<ul style="list-style-type: none"> En cumplimiento con esta norma, se deberá elaborar un Plan de Participación de las Partes Interesadas. El mismo contempla la identificación y análisis de las partes interesadas, divulgación de información del Programa, consulta pública, mecanismo de reclamos, entre otros aspectos que contempla la Norma.

Requisitos	Brechas identificadas
43. Desarrollar un mecanismo de reclamación, incluidos procedimientos específicos para la violencia sexual y de género.	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere revisión del MARRC e inclusión de un procedimiento de quejas y reclamos específico para aplicar en casos de violencia sexual y/o de género.
44. Informar sobre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI).	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá informar a las partes interesadas sobre el mecanismo independiente del BID. Se recomienda que esta comunicación se realice durante el proceso de consulta pública del Programa y a través de la página del OE.
45. Divulgar información sobre el Programa para que las partes interesadas puedan entender los riesgos e impactos que entraña y las oportunidades potenciales y beneficios de desarrollo que el Proyecto presenta.	<ul style="list-style-type: none"> En el marco de la elaboración del Plan de Participación de Partes Interesadas, se deberán incluir acciones sobre divulgación de información del Programa.
46. Participación durante la ejecución del Programa y presentación de informes externos.	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá elaborar el PPPI incluyendo como una de las acciones el seguimiento y presentación de informes.
47. Capacidad y compromiso organizacionales: El prestatario definirá funciones, responsabilidades y facultades claras y señalará los recursos humanos y financieros específicos asignados a la aplicación y el seguimiento de las actividades de participación de las partes interesadas, a fin de alcanzar los objetivos de esta Norma de Desempeño.	<ul style="list-style-type: none"> Se deberán definir funciones y responsabilidades para la implementación del PPPI, a fin de alcanzar los objetivos de esta Norma.